



DESDE EL TERRITORIO

Memorias, vivencias y reflexiones del Programa Kioscos Socioambientales

Alto a la  Expansión Piñera





UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

VAS

Vicerrectoría
de Acción Social

Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Acción Social
Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria

Coordinación: Mauricio Álvarez Mora y Moisés Salgado Ramírez
Diagramación e ilustraciones: Raquel Mora Vega
Impresión: Cuatricromía S.A. San José, Cota Rica.

Los textos que reúne este libro fueron
recopilados entre los años 2015 y 2017.

Año de impresión 2018

361.2

D448d Desde el territorio : memorias, vivencias y reflexiones del programa Kioscos Socioambientales / coordinación Mauricio Álvarez Mora y Moisés Salgado Ramírez. – [Lugar de publicación no identificado] : Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social, Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, 2018.
159 páginas : ilustraciones en blanco y negro

ISBN 978-9930-568-00-2

1. ACCION SOCIAL – ENSAYOS, CONFERENCIAS, ETC. - COSTA RICA. 2. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA RICA. PROGRAMA KIOSCOS SOCIOAMBIENTALES. 3. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA. 4. ACCION COMUNITARIA. 5. ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD. 6. COMUNIDAD Y UNIVERSIDAD.
I. Álvarez Mora, Mauricio, coordinador. II. Salgado Ramírez, Moisés, coordinador.

CIP/3317
CC.SIBDI.UCR

A las personas que luchan y resisten.

Índice

PRESENTACIÓN	9
PRÓLOGO	11
TERRITORIOS Y SENTIRES	23
Defender el territorio desde las comunidades y desde la Universidad	25
Por Dylanna Rodríguez-Muñoz	
Cuando los territorios están en disputa: una invitación al debate	27
Por José Antonio Mora Caderón y José Julián Llaguno Thomas	
Cartografía participativa como herramienta de la defensa comunitaria del territorio	30
Por Cristina Bolaños Blanco, José Antonio Mora Calderón, Mariana Porras Montero, Valeria Montoya Tabash, Valeria Morales Nuñez, Verónica Martínez Sánchez, Andrea Artavia Vargas, Andrés Jiménez Corrales, Karina Valverde Salas y Andrés León Araya	
Talamanca, cordillera de bosques, presos políticos y despojo de territorios	32
Por Andrés Cambronero Rodríguez y Zuirí Méndez Benavides	
Sobre cómo sentir la voz de una historia o sobre cómo compartir la voz de una historia	35
Por Sharot Marié Ugalde	
Hacia un encuentro de realidades: la cartografía participativa como herramienta de trabajo comunitario	37
Por José Julián Llaguno Thómas, José Antonio Mora Alderón, Karina Valverde Salas, Andrés Jiménez Corrales, Andrés León Araya	
AGUA Y ENERGIA PARA LA GENTE	41
El río Pacuar y El General secuestrados por la industria contaminante	43
Por El Comité Defensa comunal por los ríos Pacuar y El General	
¡Agua para las comunidades!: el trabajo de la Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador	45
Por María José Masís Méndez y Daniel Fernández Vásquez	
Comunidades que luchan por el agua en Puntarenas	47
Por Dany Villalobos Villalobos	
Organización comunitaria en defensa del agua	50
Comisión Defensora De Los Ríos Convento y Sonador	
Conflicto por el Agua en Guacimal: en lugar de acusar, debatir	52
Por Moisés Salgado Ramírez y Mauricio Álvarez Mora	

Del Diquís a la represa “Chinis” Por Mauricio Álvarez Mora	55
Están secando más ríos: Abangares, Guacimal, Aranjuez, Aranjuecito, Acapulco y Lagarto Por Danny Villalobos Villalobos	58
¡Guacimal bebió de su río conciencia y valentía! Mauricio Álvarez Mora	62
Berta Cáceres y el ICE transnacional: A 16 años del Combo eléctrico ¿dónde está el ICE que defendimos? Por Mauricio Álvarez Mora	65
MONOCULTIVOS Y SAQUEOS	77
Escenarios políticos: la ruta de la expansión piñera se fortalece Por Karina Valverde Salas	79
¿Exportar postres o producir alimentos? Por Julián Llaguno Thomas y Verónica Martínez Sánchez	81
Monocultivos: ¿se muerden la cola? Por Mauricio Álvarez Mora	84
La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Por Nicolás Boeglin	87
INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y DERECHOS	91
¿Qué pasó con el Aeropuerto Internacional del Sur? José Antonio Mora Calderón	92
Decidamos: Parque de las Esferas como Patrimonio de la Humanidad o Aeropuerto Internacional José Antonio Mora Calderón	95
¿Otro aeropuerto internacional en Costa Rica? José Antonio Mora Calderón	98
La tierra para quien la trabaja, o ¿un aeropuerto en la Zona Sur? José Antonio Mora Calderón	101
La gente de Finca 9 y 10 espera respuestas mientras se decide sobre el Aeropuerto del Sur José Antonio Mora Calderón	103
Vivencias campesinas por la tierra: Relato de un campesino en la frontera Caribe Por José Julián Llaguno Thomas y Verónica Martínez Sánchez	106
Florecer entre los restos de mil naufragios. Tomas de tierra en la United Fruit de Palmar Sur, Costa Rica Ramón Vera Herrera	109

CAMBIO CLIMÁTICO, BOSQUES Y PUEBLOS 119

Soluciones de los pueblos al cambio climático 120
Por Andrés Cambronero Rodríguez y Zuirí Méndez Benavides

Indígenas denuncian irregularidades de representatividad en proceso de preparación a REDD+ 123
Por Marita Arce Soto

La montaña no es un recurso de mercantilización 126
Zuirí Méndez Benavides

¿Cuál es el precio por conservar REDD+? 129
Zuirí Méndez Benavides

ACCIÓN CRÍTICA 133

El Programa Kioscos Socioambientales fortalece la docencia en la Escuela de Psicología 135
Por María José Masís Méndez

Crítica socioambiental al primer año del Gobierno 137
Por Mauricio Álvarez Mora

Vínculos de Acción Social 140
Por Daniel Fernández Vásquez y Valeria Montoya Tabash

OCTAVO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA KIOSCOS SOCIOAMBIENTALES 145

Programa Kioscos Socioambientales, ocho años de recorrido junto a las comunidades 146
Por Moisés Salgado Ramírez

8 años de acción y compromiso social universitario ;Por una comunidad donde quepan muchos mundos! 149
Por Mauricio Alvarez Mora

HOMENAJE 154
Lautaro del Valle: el Che Guevara que vive en Punta Uva
José Julián Llaguno Thomas

Presentación

Muchas personas se imaginan que “Kioscos Socioambientales” son una especie de toldos que se instalan en las comunidades y que estudiantes de la Universidad de Costa Rica volantean información de temas ambientales, y es que en realidad así comenzó este espacio. Fue en el año 2007 en tiempos del Tratado de Libre de Comercio (TLC), que desde la Universidad de Costa Rica y a través de la Vicerrectoría de Acción Social se inició una campaña informativa sobre las implicaciones que podría tener la aprobación de este Tratado con Estados Unidos.

Como todas y todos sabemos, este Tratado se aprueba en un Referéndum y 10 años después la situación de nuestro país sigue mostrando graves consecuencias políticas, económicas y socio-ambientales en todos sus rincones, por la lógica de acumulación que acuerpan los TLC's.

En este contexto, en el año 2008, Kioscos Informativos del TLC pasa a llamarse Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, intentando dar continuidad al trabajo que se había iniciado, pero esta vez concentrándonos en fortalecer las capacidades organizativas en comunidades que se enfrentan a diferentes formas de despojo de sus bienes comunes.

Es así como hemos acompañado diversos procesos socioeducativos con grupos y organizaciones comunales que defienden sus territorios frente a la construcción de megaproyectos extractivistas como grandes cadenas hoteleras, proyectos hidroeléctricos, marinas, monocultivos como la piña, aeropuertos y proyectos de despojo que amenazan con privatizar los bienes de los territorios indígenas.

En este libro nos interesa reflexionar sobre las problemáticas actuales que se desarrollan en distintos territorios de nuestro país, desde las miradas y experiencias que hemos venido construyendo en el Programa Kioscos: docentes, estudiantes y personas de organizaciones comunitarias. La publicación resume los principales conflictos, aprendizajes, temas y realidades que abordamos en los años 2015 y 2016.

La mayoría de estos artículos fueron escritos para la columna mensual que mantiene Kioscos en el Semanario Universidad y algunos en otros medios de comunicación nacional. Son parte de nuestro ejercicio de lectura crítica de la realidad y buscan abrir debates necesarios para la lograr una transformación social.

Deseamos agradecer a todas las personas que participan en la escritura de estos artículos y especialmente a Ramón Vera-Herrera, no solo por querer prologar esta revista, sino también por todos los espacios llenos de conversaciones profundas y aprendizajes que durante varios años ha compartido con el equipo del Programa Kioscos Socio-ambientales.

Mauricio Álvarez Mora
Moisés Salgado Ramírez
Docentes Programa Kioscos Socio-ambientales

Prólogo

El collar de la memoria

No todos los días puede alguien acceder a una publicación cuya información, argumentación, andamiaje de datos y reflexiones provenga de la relación cercana entre quienes investigan asuntos de interés local, regional, nacional y mundial, y quienes están en el centro de los ataques, obstáculos, expulsiones, acaparamientos, despojos, devastaciones, contaminaciones, intoxicaciones o políticas públicas nocivas que da pie a tales investigaciones en las comunidades, los pueblos o las poblaciones de los barrios de las ciudades.

En este libro, cada uno de los casos mostrados tiene un equilibrio muy notable entre toda esa riqueza surgida del abajo, procedente del lugar de los hechos, de “el terreno”, como le dicen, más toda la reflexión e indagación de gabinete o “internet” que disparan los casos, hasta remontar y revivir la historia de regiones, enclaves, comunidades, personas.

Y eso es un logro mayúsculo. Un logro que deviene de una actitud de respeto y cercanía. Para las investigadoras e investigadores de Kioscos la lógica de sus investigaciones no se desliga de un proceso integral de cercanía con las comunidades CON las que investigan o rearmen un caso y, por si fuera poco, no está al servicio de la Academia, por suelta que ésta sea, sino que está al servi-

cio de las comunidades u organizaciones con las que se fueron tejiendo, paso a paso, los avatares de esta búsqueda, de estas indagaciones, estos testimonios, experiencias y diagnósticos que reflejan muy cercanamente segmentos de vida arrancados de sus historias regionales configurando una sistematización que también logra ser algo más al verla conjuntada en los varios textos: el modo de operar de las corporaciones, el modo de operar del capital, los modos de operar de los gobiernos —a todos niveles— cuando le abren margen de maniobra a estas empresas, y le cierran, palmo a palmo, los caminos de la legalidad y el orden a las comunidades y organizaciones, marginándolas con leyes y políticas públicas nocivas, de la posibilidad real de enfrentar los problemas que les fueron acarreados. Las investigaciones de Kioscos, siendo “socioambientales”, terminan desnudando el “desvío de poder”, ese delito dictaminado por el Tribunal Permanente de los Pueblos para el caso de México, pero que se extiende a nivel mundial en todos los casos en que corporaciones y gobiernos comienzan a imbricarse inextricablemente contra la población —sin importar la devastación ambiental, política, social, económica y material que esto represente.

Puesto así, Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria no es estrictamente un programa de extensión universitaria, que en específico en la UCR se le conoce como Acción Social. Es un proyecto que ha abierto el foco de la acción de la Universidad de Costa Rica, al ámbito donde las condiciones que pesan sobre una población particular son tamizadas a través no sólo de los ojos de los investigadores nacidos de la universidad.

Son investigaciones que incluyen también la mirada propia, que es tanto y que en general es menospreciada por la academia como mera acción “informante”, cuando que son ellas y ellos quienes viven integralmente la serie de vicisitudes y fuerzas, obstáculos, ataques o transformaciones que configuran su historia presente como devenir de su historia anterior, por lo que son ellas y ellos quienes pueden lograr una comprensión del futuro de la situación, sobre todo si se da pie a una reflexión colectiva y expresada sobre estas condiciones.

En ese sentido, el actuar de Kioscos, con su trabajo meticuloso de espejo, de recuperación, de ser compañeros para entender procesos complejos, permite que las comunidades tengan un cotejo para su propia reflexión y logra, mediante el avivamiento de la memoria, armar el rompecabezas de lo que Costa Rica y Centroamérica son en el detalle, la cotidianidad y la memoria plena y colectiva.

Los textos que este libro aloja, servirán también para mostrar y devolver esto que la gente rememora y a partir de lo cual puede situar y entender lo que se tiende contra ellas, y lo que ellas pueden lograr al organizarse y buscar entender en colectivo.

Así, Dylanna Rodríguez-Muñoz se pregunta por el propio quehacer de Kioscos. De la construcción de vínculos entre la universidad y las comunidades y regiones. De la sistematización de las experiencias, de cómo traer las comunidades a la universidad y cómo llevar la universidad a las comunidades”.

José Antonio Mora y Julián Llaguno comienzan a construir el relato de lo que enfrentan las comunidades al configurar las complejidades que cruzan las relaciones de las que hablamos.

“¿Pero qué entendemos por territorio?”, se preguntan y abundan: “Lo concebimos como un espacio geográfico determinado por el conjunto de relaciones sociales específicas que lo ocupan. En este sentido nuestra concepción toma como punto central las relaciones entre los seres humanos (entre ellas y ellos) y con la naturaleza. Es decir, entendemos el territorio como una construcción social y no como algo que se da de forma predeterminada, por lo que su significado es distinto al de espacio”

Si el territorio es una construcción social, la visión propuesta por Kioscos es una “multidimensional, compleja y dinámica” y que toma al ser humano como parte de la naturaleza y como parte de las estructuras sociales y económicas que interactúan con esos territorios y esas poblaciones: la defensa, el acaparamiento o el despojo de territorios, es vista entonces como algo metabólico que obedece a la estructura del poder y a la configuración y reconfiguración de los intereses de las corporaciones y gobiernos y la claridad o conciencia que las poblaciones tengan sobre sus propios procesos.

Cristina Bolaños, pero también Julián Llaguno, José Mora y Karina Valverde en un texto aparte, abordan la cartografía participativa como herramienta para entender los procesos que enfrentan las comunidades. Así los mapas que propone Kioscos contradice la factura de mapas que ha sido siempre una herramienta del poder, lo que establecía y legitimaba “prácticas de dominación, extractivismo y despojo de los territorios representados”. Los mapas del poder invisibilizaban “las consecuencias negativas” de esos procesos y facilitaban la ocurrencia enfermedades, explotación, devastación de la naturaleza, desplazamiento de personas, contaminación, acaparamiento de tierras.

En cambio, cuando la creación de mapas se utiliza para que la gente reflexione sobre su condición, puede potenciarse la reflexión, los vínculos y relaciones, y entonces afloran mapas sumamente significativos, pues iluminan los procesos subyacentes. El texto de Cristina Bolaños clarifica el papel de la cartografía en la región norte-norte dentro del territorio de la predatora agroindustria “piñera”.

En el caso del texto de Llaguno, Mora y Valverde, se detalla la experiencia entre Kioscos y el centro de investigación y estudios políticos (CIEP) “hacia la comunidad de Caño Negro, en el cantón de Los Chiles”. Dicen de su experiencia: “después del encuentro, nos queda claro que los mapas son formas de plasmar de manera visual las consecuencias que tienen múltiples decisiones políticas sobre los territorios. Y en este sentido, también son expresión de la manera tan diversa como diferentes actores entienden y expresan sus relaciones con la naturaleza. De tal manera que quedamos con la satisfacción de que estos espacios son un pequeña ventana para mostrar esos otros mundos que no siempre son visibles desde otras partes del país”.

Andrés Cambroner y Zuirí Méndez profundizan sobre el espacio territorial del pueblo bribri, en la cuenca del Telire, en pleno Talamanca donde la defensa territorial ha tenido que enfrentar las estafas propuestas por los programas REDD+ que ahora, de la nada, quieren darles dinero por cuidar su bosque posibilitando que quien les “paga”, lucre con el certificado de pago, llamado bono, que puede utilizar para seguir depredando, pero también para hacer negocio con dicho certificado, que llega a cotizar en bolsa de valores.

Ésa no es la única violencia. Hay violencia concreta e inmediata, como en las quemadas de casa, de semillas de utensilios de trabajo y de comida que han ocurrido en la vertiente del Pacífico. Ahí hay la criminalización de los y las bribri que buscan recuperar sus tierras, como las mujeres de Salitre que en un comunicado declaraban: “Las agresiones que atentan contra la dignidad y la vida de las mujeres defensoras, son de tipo: físico, psicológico, económico, espiritual y territorial. Hay golpes, heridas, mutilaciones, quemaduras, lesiones a personas con discapacidad física. Tortura, traumas de las niñas y los niños al observar los ataques contra sus familiares, estados emocionales depresivos, angustia ante la incertidumbre de un ataque inminente”.

El equipo de Kioscos también está reflexionando todo el tiempo sobre la necesidad de narrar las experiencias y convertirlas en historias significativas. Así, Sharot Marié Ugalde ahonda sobre su experiencia en un taller de narrativa donde en lugar de aprender a “crear un título, cómo introducir, cómo se escribe tal palabra, qué orden debo llevar [...] ese día aprendimos que ya sabíamos contar nuestras historias, que hay muchas formas de expresarlas, que ya teníamos las bases, pues ya sabíamos sentirlas, pensarlas y contarlas, teníamos la capacidad de no ser imparciales, de no ser censurados y el poder de confirmar por experiencia propia lo que narráramos”.

En el ánimo de hacer el relato de qué significa el agua y la energía en el horizonte de las comunidades, el recuento elaborado por el Comité Comunal por los ríos Pacuar y El General, nos habla de la suerte que corren dichas cuencas y el trabajo de las Juntas de Pacuar para impedir el “desarrollo desmedido que destruye el medio ambiente y afecta a los pobladores de la zona” debido a

la transferencia de residuos sólidos y el tratamiento de lixiviados. Es un llamado a una conciencia en defensa del agua común en la municipalidad de Pérez Zeledón.

También el trabajo de la Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador es abordado por Kioscos, en este caso por María José Masís y Daniel Fernández quienes abordan los efectos de los proyectos hidroeléctricos para producir energía a partir de los ríos Convento y Sonador en Buenos Aires de Punta Arenas y la conciencia y lucha comunitaria emprendida por las vecinas y vecinos de Longo Mai, Convento y Cristo Rey mediante procesos de educación ambiental “para sensibilizar a miembros de sus comunidades”. La propia Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador dan su versión de los hechos.

La lucha por el agua se ve reflejada en varias clases de apropiaciones: la contaminación, el aprovechamiento desmedido que devasta los territorios para llevar a otras partes el agua y el uso indebido de la misma acaparándola en detrimento de la gente de la región como ocurre con Guacimal y la defensa del río Veracruz, comunidad que logró frenar un proyecto de riego impulsado irregularmente por un convenio público-privado. Dany Villalobos da cuenta de este proceso y del desvío de cauces y otros asuntos relacionados con el río Guacimal, como también lo hacen otros autores del libro para enhebrar reflexiones de lo que implica la imbricación de las comunidades con sus ríos.

No obstante, toda esta lucha en defensa del agua ha ido generando información y reflexiones y son Moisés Salgado y de nuevo Mauricio Álvarez quienes relatan las estrategias que dieron un giro, de la mera denuncia a la búsqueda de un debate público, sobre todo por los señalamientos realizados por Senara y el Ministerio de Agricultura contra el modo de actuar de Kioscos, lo que

es contestado con amplitud, insistiendo siempre en la invitación al “debate sobre el tema con las comunidades afectadas”.

No todo lo mostrado en el libro está en el ámbito del trabajo comunitario.

También entran en el recuento los esquemas de comercio e inversión, como el Acuerdo Bilateral de Inversiones con China, y el relato incluye la falta de transparencia, la secrecía, las concesiones para la explotación de recursos y el sometimiento a tribunales arbitrales de resolución de controversias que sancionan negativamente cualquier medida “equivalente a la expropiación” y todo lo que huela a derechos humanos o ambientales.

Es Mauricio Álvarez quien aborda estos temas candentes, toda vez que hablamos de instrumentos de “desvío de poder”, tratados de libre comercio que en los hechos son una renuncia, no tan paulatina de la soberanía nacional y que en el caso del que nos ocupa con China termina legalizando “formas de esclavitud y de violación de los derechos laborales”, proyectos como el de la hidroeléctrica del Diquís y proyectos petroleros con China National Petroleum Corporation (CNPC).

No es sólo Costa Rica el ámbito que abarca el libro, porque en todo el espacio latinoamericano tiende su manto la corrupción, la delincuencia y el extractivismo que despoja, devasta y reprime a quien se queje. Así, también la violencia contra los defensores de ríos, bosques, comunidades y recursos pasa a revisión, sea en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, México y Colombia. Y entre ellos el asesinato de Berta Cáceres será siempre un hoyo ennegrecido de vergüenza, impunidad y horror. La limpieza de una dirigente como Berta fue y será un ejemplo de la dignidad de quienes defienden la vida como meta de vida, sin importar la muerte.

El extractivismo no son sólo minas o petróleo. Se suman como marejada el acaparamiento y contaminación del agua y muy centralmente la producción de energía para ciudades y proyectos industriales.

En ese sentido, el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene ya a estas alturas un negro historial de corrupciones, irresponsabilidades y violencia hacia las poblaciones afectadas por sus operaciones y proyectos.

Pasan a revisión también los monocultivos, los saqueos y la devastación que deja tras de sí la expansión de la agricultura industrial en todo Costa Rica. Y hablar en Costa Rica de expansión de la agricultura industrial es hablar de la expansión piñera y bananera y de los montajes políticos para fortalecer la posición de dichos enclaves, como nos lo relata Karina Valverde Salas. Es tan vasta la expansión de la piña que creció 1,422% en extensión de hectáreas sembradas respecto del censo de 1984.

Son también la palma africana y el acaparamiento de tierras que implican, con la contracción equivalente de arroz, frijol y maíz.

Julián Llaguno, Verónica Martínez y Mauricio Álvarez nos hablan de todo esto, pero hay que insistir que el caso de la piña es realmente escandaloso, y es Nicolás Boeglin con edición de Karina Valverde quienes profundizan las graves violaciones a los derechos humanos que implican estas plantaciones apoderadas de Costa Rica.

Conforme avanza el libro, uno va teniendo la certeza de que el libro de Kioscos es un recuento bastante exhaustivo de los conflictos socioambientales y las luchas en defensa de los territorios campesinos indígenas, y

así José Antonio Mora nos relata la resistencia, que ha llegado a ser noticia de nivel internacional, de los pueblos Brorán y y Boruca en territorios Térraba y Rey Curré, en la región Brunca del Pacífico Sur costarricense. Y no es para menos pues se quiere establecer un aeropuerto internacional, que en los hechos abriría la zona a todo tipo de tráficos y comercios con el pretexto de convertir la región en un enclave turístico y de descanso en la senectud para miles de extranjeros. El Humedal Nacional Térraba Sierpe quedaría en entredicho.

Andrés Cambroner, Marita Arce y Zuirí Méndez han logrado muy bien enhebrar los argumentos de las comunidades contra REDD+, y la estafa de ofrecer un pago por algo que se cobrará con creces, pero aún así los operadores locales buscan afanosos destruir las reticencias y reprimir las resistencias para instaurarse como falsas soluciones en un país que no se percata, por lo menos en el discurso público de sus gobernantes, que está muy lejos del ideal que le pintan en la publicidad internacional.

Así, testimonio tras testimonio, voz tras voz, un país se aparece en la penumbra de ataques y resistencias, en la dialéctica de la gente contra todo lo que se opone a su verdadera vida tendida.

En ese escenario, Kioscos Socioambientales han tenido un papel crucial en promover vínculos, celebrar talleres, encuentros, publicaciones, investigaciones, y barrer el escenario de los ataques, que van de la sofisticación de REDD+ y sus manipulaciones financieras ajenas a las comunidades, hasta la expulsión de campesinos para la instalación de palma africana o plantaciones piñeras, pasando por el universo de contaminación del agua, fracking, mineras o megaproyectos turísticos o de expansión urbana, los transgénicos o la biología sintética.

Sin duda este libro es un tónico para despertar de tanto sueño que resulta pesadilla, y ejercer la crítica mediante la sistematización de los agravios y la interioridad más sentida de la gente que es agraviada por todos estos embates.

Ojalá y la lectura de este documento enriquezca la reflexión que se realiza abajo, y no solo alimente los ámbitos universitarios donde, es seguro, también impactará y transformará conciencias y miradas.

Ramón Vera-Herrera¹

¹ Mexicano, es miembro de la red internacional de investigadores ecologistas GRAIN, editor de la Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, editor del suplemento mensual Ojarasca del periódico La Jornada.



TERRITORIOS Y SENTIRES

Defender el territorio desde las comunidades y desde la Universidad

Por Dylanna Rodríguez-Muñoz (*)

Durante los 8 años que han transcurrido desde que se creó el Programa Kioscos Socio ambientales, se han generado vínculos tanto con diversas comunidades campesinas, costeras y territorios indígenas que han dado su lucha frente a problemáticas socio-ambientales, relacionadas con el Plan Mesoamérica, biodiversidad y el agro costarricense, como a nivel universitario, por ello, se ha trabajado con unidades académicas (Psicología, Ciencias Políticas, Trabajo Social), centros de investigación (Centro de Investigación y Estudios Políticos –CIEP-, Instituto de Investigaciones Sociales –IIS-), sedes, recintos, otras universidades públicas y proyectos de acción social para tratar de articular esfuerzos comunitarios y académicos con el objetivo de generar las transformaciones necesarias en nuestra sociedad.

A raíz de las experiencias que hemos construido durante este tiempo, a inicios del 2014 se inició un proceso de fortalecimiento de dichos vínculos, que se consolida en lo que hoy es la Cátedra Defensa Comunitaria del Territorio, valga rescatar, que esta es la única cátedra que hasta el momento se crea desde un programa de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica.

(*)Asistente del Programa Kioscos Socioambientales.

El objetivo de este espacio es traer las comunidades a la universidad y llevar la universidad a las comunidades, así, uno de los proyectos que permite hacer de esta posición política una realidad, es la escuela de multiplicación metodológica con líderes y lideresas de las diferentes comunidades en las que Kioscos trabaja, desde la concepción pedagógica de la Educación Popular.

Partiendo de lo anterior, durante el semestre anterior impartimos el curso corto de Educación Popular para estudiantes de la UCR con preferencia, involucrados e involucradas en proyectos de acción social, con el propósito de legitimar y posicionar otras formas de aprender y enseñar, especialmente porque muchas veces se llega a las comunidades asumiendo una posición del /la que aprende y el/la que enseña, negando la posibilidad de ver el encuentro como un medio de aprendizaje y enseñanza mutuos.

Reconocemos así, la importancia y la necesidad de que estos espacios se continúen construyendo, teniendo como punto de partida, cuestionar nuestra propia realidad.

Cuando los territorios están en disputa: una invitación al debate

Por José Antonio Mora Caderón
y José Julián Llaguno Thomas (*)

Cuando usted sale del mal-llamado Valle Central de Costa Rica (porque geográficamente no es un valle), se da cuenta de que las comunidades rurales se enfrentan a una serie de problemáticas asociadas a la tenencia de la tierra, el agua, los bosques, el suelo, el subsuelo y los saberes, es decir problemáticas que ponen los distintos territorios, comunales, locales y regionales como escenarios de disputas por determinados intereses, por parte de diferentes actores (sociales, económicos e institucionales) que interactúan de forma desigual en un mismo espacio.

¿Pero qué entendemos por territorio? Lo concebimos como un espacio geográfico determinado por el conjunto de relaciones sociales específicas que lo ocupan. En este sentido nuestra concepción toma como punto central las relaciones entre los seres humanos (entre ellas y ellos) y con la naturaleza. Es decir entendemos el territorio como una construcción social y no como algo que se da de forma predeterminada, por lo que su significado es distinto al de espacio, donde está contemplado específicamente la esfera natural (suelos, sustrato rocoso, vegetación, clima, relieve, ríos, entre otros).

(*) *Docentes del Programa Kioscos Socioambientales.*

Esta perspectiva implica situarse desde una visión multidimensional, compleja y dinámica del territorio, ya que trata de ser congruente con los procesos ecológicos, tomando al ser humano como parte de la naturaleza (y no como su centro), a diferencia de visiones técnicas y muchas veces positivistas que entienden esto como la gestión de los “recursos naturales”, con el fin de ser “explotados”. En definitiva, nuestra noción del territorio está marcada por las experiencias y conceptualizaciones críticas que se han generado desde las luchas de distintos movimientos socioterritoriales de América Latina, acompañados por sectores académicos y ecologistas que comparten esta visión de entender y estar en el mundo.

Viendo el territorio como espacio multidimensional, es importante recordar la variabilidad de actores e intereses, lo cual lleva a que se hable de “defensa”, “despojo” o “concentración” de territorios. Ejemplos de esto en Costa Rica se pueden ver a través de las distintas amenazas de concentrar los bosques en los pueblos originarios, para introducirlos en los mercados de carbono a través de los mecanismos de REDD+ y la resistencia de los bribis por mantener un manejo comunitario de los bosques, la expansión de los monocultivos como la piña y la palma africana en el Zona Norte, Caribe Norte y Sur y Pacífico Central y Sur que promueven la concentración de tierras, la construcción de megainfraestructura como el posible aeropuerto en Zona Sur, hoteles 5 estrellas, resorts, marinas, casas de vacación, apartamentos y canchas de golf en Guanacaste, proyectos hidroeléctricos en la Zona Norte y la Zona Sur, que despojan a las comunidades.

En síntesis, en medio del actual modelo de acumulación de riquezas, que ha provocado una enorme brecha social y por ende una distribución desigual del espacio, existen comunidades organizadas para defender los distintos elementos de la naturaleza, lo cual puede entenderse como comunidades organizadas defendiendo sus territorios, así como sus diversas manifestaciones culturales, sus saberes, historias, comidas, familias, cuerpos, es decir sus múltiples territorialidades. Finalmente, nuestra intención con esta columna es invitar al debate plural y crítico sobre las distintas territorialidades que se están construyendo en las comunidades rurales que están buscando formas de vida más orgánicas, justas, solidarias y equitativas.

Cartografía participativa como herramienta de la defensa comunitaria del territorio

Por Cristina Bolaños Blanco, José Antonio Mora Calderón,
Mariana Porras Montero, Valeria Montoya Tabash,
Valeria Morales Nuñez, Verónica Martínez Sánchez, Andrea
Artavia Vargas, Andrés Jiménez Corrales,
Karina Valverde Salas y Andrés León Araya (*)

Históricamente, la cartografía, ese arte de crear representaciones del espacio, ha sido propiedad de grupos hegemónicos: estado, empresas, universidades, institutos geográficos y organizaciones no gubernamentales, etc.; lo que ha permitido el establecimiento y legitimación de prácticas de dominación, extractivismo y despojo en los territorios representados. Así, dichos mapas han contribuido a invisibilizar las consecuencias negativas de estas dinámicas: contaminación, enfermedades, explotación, extracción y destrucción de la naturaleza, desplazamientos de personas y conocimientos, desigualdades sociales, entre otras.

Mediante la utilización de metodologías que apuestan por el involucramiento directo de las comunidades afectadas, y la recuperación de sus conocimientos y saberes, la cartografía participativa se presenta como una herramienta fundamental para la defensa comunitaria de los territorios. Las preguntas que guían esta práctica son: ¿Qué función cumplen los mapas en la realidad social? ¿Qué pasa si las comunidades aprenden a realizar sus propias cartografías? ¿Es la cartografía una herramienta para defender comunitariamente los territorios?

Con estas preguntas en mente, desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) junto con el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, se están llevando a cabo dos procesos de cartografía participativa para la defensa comunitaria del territorio. Uno de ellos en la Región Norte-Norte en conjunto con la Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte Norte (Clann), donde se han venido cartografiado las consecuencias generadas por el “territorio piñero”, determinando la ruta de su expansión y caracterizando a su vez los daños sociales y ambientales que ha ocasionado en sus pueblos.

El otro proceso se está desarrollando en el cantón de Talamanca. Familias campesinas de la comunidad de Paraíso de Sixaola están mapeando los distintos territorios que colindan con sus parcelas, identificando las tensiones y conflictos que se generan con otros actores, tales como las empresas bananeras y el Estado, así como las amenazas que reciben sus formas de vida, entre las que resaltan el encontrarse dentro de la Milla Fronteriza y el uso masivo de pesticidas por parte de las bananeras. Al mismo tiempo, las comunidades bribbris elaboran mapas sobre las formas en que distintos procesos (REDD+, exploración petrolera, agronegocio, la intervención estatal, entre otros) atentan en contra de sus formas de vida ancestrales y por ende, en contra de sus territorios.

De esta manera, además de los resultados finales (los mapas), el proceso de cartografía participativa se ha convertido en un espacio importante de reflexión y análisis sobre las realidades y problemáticas que viven estas comunidades; brindando así otras perspectivas de sus territorios y permitiendo la identificación de experiencias compartidas y la elaboración colectiva de posibles estrategias de resistencia y construcción de esos mundos más habitables que no aparecen en los mapas “oficiales”.

Talamanca, cordillera de bosques, presos políticos y despojo de territorios

Por **Andrés Cambroneró Rodríguez**
y **Zuiri Méndez Benavides** (*)

Talamanca se abre en neblina que amanece de la cuenca del Telire, el bosque ancestral respira profundamente en su sinfín de montañas que podrían ser un universo. El fogón está encendido, el café caliente, todos se van acercando poco a poco a la cocina a una conversación que convoca iniciar luego de una noche larga. Anoche, todos se dieron cuenta de que de la nada, apareció una consultoría de un “REDD+ indígena”, construida supuestamente por los pueblos y una falta de sorpresa se desplaza entre todos al explicar que nadie participó de este proyecto.

-¿Por qué ahora nos van a pagar por cuidar el bosque? ¿Quién nos quiere dar dinero? ¿Qué piden a cambio del pago? -Pregunta el mayor comiendo su desayuno, mientras todos se miran respondiendo lo obvio.

Hay un aire de indignación que recorre cada palabra pronunciada, porque hace menos de un mes, escucharon la conferencia de prensa de cinco mujeres indígenas que denuncian la violencia que viven en el territorio Bribri de Salitre, en su proceso de recuperación de tierras. Y hace casi un año Sergio Rojas, promotor de recuperación de tierras, fue detenido y preso durante cinco meses y continúa criminalizado con un proceso judicial permanente.

(*) *Asistente y Docente Programa Kioscos Socioambientales.*

Es una gran cordillera que une a las comunidades de Talamanca y Salitre, no las separa. Se unen entre memorias, resistencias, que en actos cotidianos de defensa por la tierra, hacen crecer el bosque, recuperan las tierras que les pertenecen, luchan contra la injusticia.

“Bosques polinizadores de bosques” es la razón en Talamanca para hacerlos crecer. Son las comunidades humanas que cultivan plátanos, cacao, maíz, alimentando a los animales de la selva, que a su vez polinizan las tierras de más árboles, para luego las comunidades, continuar cuidando de la tala, de la avaricia, utilizando sólo lo que necesitan, manteniendo una red/ciclo que muchos intentamos recuperar, y que un proyecto como REDD+ puede empezar a quebrar.

Al otro lado de la cordillera, están las mujeres en Salitre, reconociendo que son ellas y sus comunidades, que con sus cuerpos están recuperando tierras que el Estado nunca regresó. Denuncian en el comunicado del 15 de setiembre de este año: “Las agresiones que atentan contra la dignidad y la vida de las mujeres defensoras, son de tipo: físico, psicológico, económico, espiritual y territorial. Hay golpes, heridas, mutilaciones, quemaduras, lesiones a personas con discapacidad física. Tortura, traumas de las niñas y los niños al observar los ataques contra sus familiares, estados emocionales depresivos, angustia ante la incertidumbre de un ataque inminente. La quema de las viviendas junto a sus pertenencias, la quema de las semillas, las herramientas del trabajo de campo, los utensilios de cocina y producción, comida, material de elaboración de trabajo artesanal. Todos son la pérdida de los elementos de representación espiritual esenciales para recrear la vida colectiva”.

Tanto las mujeres, Sergio Rojas y muchas personas más, continúan en la práctica de recuperación de las tierras indígenas. Práctica de recuperación, que insiste en hacer cumplir la justicia, pues al ser expulsados de la Asamblea Legislativa en el 2010, decidieron ser las mismas comunidades quienes recuperen sus tierras y hagan respetar su autonomía.

En Talamanca amanece y anochece, resuena un nada que celebrar tras un 12 de octubre, que recuerda los caminos del despojo intentando ingresar en una cordillera, que no dejará que suceda tan fácilmente.

Sobre cómo sentir la voz de una historia o sobre cómo compartir la voz de una historia

Por Sharot Marié Ugalde (*)

El periódico el Semanario UNIVERSIDAD le dio el chance a Kioscos Socioambientales de publicar una columna cada 15 días, y como es de esperar de quienes trabajan en este programa pensaron en nosotros y nosotras, personas de todos los rincones de nuestro país, que tenemos historias para compartir con ustedes y creemos importante que tengan acceso a cualquiera de los acontecimientos que no se cuentan o se cuentan a medias por otros medios. ¿Qué les parece tener la oportunidad de leer la historia escrita del puño de sus protagonistas?

El miércoles 2 de septiembre, un grupo de personas realmente diferenciadas al estudiante promedio de la U asistimos a este espacio para recibir una lección muy importante. De comunidades viajamos por muchas horas, desayunamos y corrimos para llegar a la única clase de “cómo escribir un artículo para este periódico”. ¡Qué gran oportunidad! Al llegar a la Universidad formamos una fila para tomar el bus que nos llevaría a la ciudad científica. Que dignificante fue para mí, ver la singulari-

(*) *Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte Norte. Río Celeste.*

dad de aquella fila formada por 11 seres coloridos, sonrientes, hablantines y un par de bromistas, personas con muchas historias, con muchas voces de lucha, de amor, de entrega y de pasión.

La clase nos tomó por sorpresa, porque en realidad no era lo que esperábamos, creímos que nos enseñarían cómo crear un título, cómo introducir, cómo se escribe tal palabra, qué cosa jamás debo escribir, qué orden tengo que llevar, cómo llamar la atención de los lectores y no sé qué cosas más. Ese día aprendimos que ya sabíamos contar nuestras historias, que hay muchas formas de expresarlas, que ya teníamos las bases, pues ya sabíamos sentirlas, pensarlas y contarlas, teníamos la capacidad de no ser imparciales, de no ser censurados y el poder de confirmar por experiencia propia lo que narráramos.

Este es nuestro primer acercamiento a ustedes, tomamos este espacio para comunicarles los trabajos y luchas por nuestros territorios que estamos realizando; pronto cada una de nuestras voces podrán contarles las verdaderas historias cotidianas, la noticia y el acontecimiento de las comunidades. Podremos ir paso a paso ampliando las fronteras de los medios y formas de comunicación.

Hacia un encuentro de realidades: la cartografía participativa como herramienta de trabajo comunitario

Por José Julián Llaguno Thomas, Karina Valverde Salas, José Antorio Mora Calderón (1), Andrés Jiménez Corrales (2) y Andrés León Araya.

El pasado jueves 7 de julio, salieron temprano de sus casas personas representantes de comunidades del cantón Talamanca, venían desde Paraíso de Sixaola y del Territorio Bribri hacia San José. Al día siguiente estas personas salieron junto a estudiantes y docentes del Programa Kioscos y del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) hacia la comunidad de Caño Negro, ubicada en el cantón de Los Chiles.

Nos dirigimos a este lugar a compartir nuestras experiencias de elaboración de varios mapas realizados desde el año 2015, cuyo objetivo ha sido narrar sus distintas formas de defender sus territorios y las territorialidades que construyen, de las distintas amenazas que atentan contra las formas de estar en el mundo de estas comunidades.

Llegamos a Caño Negro y nos esperaban con una rica cena las señoras conocidas como “las maperas”, quienes pertenecen a la Coordinadora de Lucha Ambientalista

(1) Docentes del Programa Kioscos Socioambientales.

(2) Estudiante de Geografía.

(3) Investigador en Centro de Investigación y Estudios Políticos.

Norte-norte (CLANN). Se le conoce de esta forma debido a que han utilizado la cartografía para identificar los sitios de expansión del monocultivo de piña en los tres cantones de su región: Upala, Guatuso y Los Chiles. Los cuales han experimentado procesos de despojo debido a la siembra de piña, ocasionando muchos problemas ambientales y sociales que se han traducido en significativos conflictos para las comunidades.

El sábado 9 de julio, se encontraron las personas de estas dos regiones para compartir sus experiencias de elaboración cartográfica. Esto se realizó alrededor de tres preguntas generadoras: ¿Por qué los hicieron?, ¿Cómo los hicieron? y ¿Qué usos les están dando a estos mapas? La importancia del encuentro era que las personas pudieran observar cómo los mapas son y pueden funcionar como una herramienta política, capaz de comunicar problemáticas pertinentes para informar, denunciar y visibilizar información al resto de las comunidades en un formato más claro. Para nuestro equipo de trabajo era vital profundizar en esta forma de narrar las experiencias, con el fin de tender puentes de diálogo y discusión entre diferentes lugares que viven situaciones similares dentro de Costa Rica y así también poder visualizar patrones comunes de disputas por el territorio con otros procesos presentes en el resto de América Latina.

Durante la actividad quedaron claras algunas problemáticas del cantón Talamanca tales como la disputa por la tenencia de la tierra en la comunidad de Paraíso de Sixaola, así como las múltiples amenazas de desarrollo de proyectos extractivos y de privatización de los bosques del territorio indígena Bribri como es el caso de REDD+. Sobre la Zona Norte-norte se resaltó el problema de la expansión del monocultivo de piña, que ha provocado una transformación completa en el paisaje

de la zona, contaminando ríos y suelos y dejando altos impactos en la salud y bienestar de las personas. De esta manera, concluimos que la instalación de cualquier monocultivo, del tipo que sea y donde sea que se desarrolle, siempre trae a la par conflictos socioambientales, ya que estos por su lógica industrial, extensiva, agroquímica y exportadora, generan problemas tales como el acaparamiento de tierra y del agua, el desplazamiento de las lógicas campesinas de producción y la concentración de las ganancias en unas pocas empresas en su mayoría de capital transnacional.

A la reflexión del encuentro, se le sumaron diversas actividades que combinaron la risa, la dramatización, el movimiento y el dibujo como herramientas que potenciaron la creación y el intercambio colectivo. Por último, se resaltó la importancia de la construcción colectiva de saberes que contribuyen a los procesos de lucha en defensa de la vida desde una lógica comunitaria, indígena y campesina que favorezca formas de construcción del territorio más plurales, sanas y justas. En este horizonte, los mapas fueron un recurso vital para crear sentidos compartidos sobre los usos, posibilidades y limitaciones de estas formas de narración y explicación de la realidad.

Después del encuentro, nos queda claro que los mapas son formas de plasmar de manera visual las consecuencias que tienen múltiples decisiones políticas sobre los territorios. Y en este sentido, también son expresión de la manera tan diversa como diferentes actores entienden y expresan sus relaciones con la naturaleza. De tal manera que quedamos con la satisfacción de que estos espacios son un pequeña ventana para mostrar esos otros mundos que no siempre son visibles desde otras partes del país.



AGUA Y ENERGIA PARA LA GENTE

El río Pacuar y El General secuestrados por la industria contaminante

**Por el Comité Defensa Comunal
por los ríos Pacuar y El General**

Las Juntas de Pacuar, ubicado en el distrito de Daniel Flores en Pérez Zeledón, es desde hace tres años blanco de un desarrollo desmedido que destruye el medio ambiente y afecta pobladores de la zona. Los ríos Pacuar y El General albergan en sus orillas la transferencia de residuos sólidos, esta es una actividad de la Municipalidad de Pérez Zeledón en una propiedad de la empresa JEM Soluciones Ambientales S.A., empresa que también le ofrece a la Municipalidad el tratamiento de los lixiviados (jugos producto de los desechos) y la limpieza de tanques sépticos. JEM Soluciones no cuenta con viabilidad ambiental para la transferencia de la basura por tratarse supuestamente de una actividad “transitoria” y de “emergencia”, pero continúa indefinidamente.

La Municipalidad gestiona un proyecto denominado Construcción de Estación para Carga de Residuos Sólidos Ordinarios. La primera vez que se gestionó fue desestimado por Setena, ante esto integrantes de las comunidades aledañas se hacen presentes en el lugar destinado para el proyecto, para poder exponer su posición y defender los ríos, pese a esto se reanuda el proyecto. Cabe recalcar que en ningún caso se ha hecho partícipes a las comunidades directamente afectadas: Los Reyes, Cristo Rey, Las Brisas, La Trinidad.

A este caso se le suma la reciente denuncia por parte de vecinos y vecinas, de un vertedero de excreta de gallinas (gallinaza) cayendo al río Pacuar. La preocupación de los vecinos puntualiza la destrucción del hogar de especies en el río y la contaminación, ya que a escasos 100 metros de este vertedero se encuentra el matadero Coopecarnisur. Esto ha despertado preocupación por el manejo de sus desechos, así como sus biodigestores a escasos 5 metros del río.

Como si estas amenazas no fueran suficientes, la granja porcina Cristo Rey produce olores que atentan contra la salud, mezcla entre excremento de cerdo y una cantidad de químicos para disfrazar los gases nauseabundos provenientes de los biodigestores; esto hace que disfrutar de aire limpio sea cosa del pasado. Para cerrar con broche de oro, el río El General ha sido blanco de numerosas concesiones para la extracción de material. Pedregal hace fiesta, la extracción de piedra no conoce de horarios, ni restricciones. El saqueo abusivo de material ha desfigurado lo que fueron playones de río, sitios de disfrute dominical de pobladores y lugar de descanso de animales.

No porque es legal significa que es correcto. La lucha por volver a disfrutar de los ríos Pacuar y El General no es fácil, los vecinos de las comunidades nos sentimos impotentes al observar cómo esta es denominada por la Municipalidad una prueba del “Desarrollo” del cantón, aunque a los únicos que beneficia son a los propietarios industriales a costa de la salud de familias y del ambiente.

La concientización por el agua moviliza nuestra lucha. Vemos cómo el abuso de empresas que saquean y desmantelan pueblos con la autorización de entes reguladores, continúa sin tomar en cuenta la seguridad socioambiental; esto no nos deja más que empezar a movilizarnos como poblaciones afectadas.

¡Agua para las comunidades!: el trabajo de la Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador

Por María José Masís Méndez
y Daniel Fernández Vásquez (*)

Los proyectos hidroeléctricos son infraestructuras diseñadas para la generación de electricidad mediante la utilización de la energía mecánica del agua, la cual es embalsada en represas y luego transportada por una tubería de descarga hasta la casa de máquinas, donde la fuerte corriente generada mueve unas turbinas que convierten el movimiento en electricidad

La construcción y la puesta en marcha de estos proyectos inevitablemente generan cambios ambientales y sociales irreversibles, y limitan el uso de los ríos y las fuentes de agua de las comunidades cercanas; ya que, en términos prácticos, estas pasan a estar en manos de instituciones públicas o empresas privadas, quienes al final del día son las que reciben los beneficios económicos producidos.

La Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador nace en el año 2013, cuando un grupo de vecinas y vecinos de comunidades de Longo Mai, Convento y Cristo Rey de Buenos Aires de Puntarenas, se percatan de la existencia de un plan para construir dos represas hidroeléctricas en los ríos que fluyen cercanos a sus hogares.

(*) Docente y Asistente del Programa Kioscos Sociambientales.

Desde entonces, este grupo emplea la educación ambiental como herramienta para sensibilizar a miembros de sus comunidades en torno a la amenaza que significa el reciente surgimiento de “una ola de privatización”, según comentaron sus miembros y que pretende secar los ríos para la producción de energía eléctrica. Es en este contexto que, a partir del 2014, el Programa Kioscos Socioambientales acompaña el trabajo que realiza la Comisión.

Es así como al día de hoy se han realizado actividades culturales, caminatas y sesiones de trabajo en torno a análisis de coyuntura que han favorecido la creación y potenciación de una red más amplia de trabajo en el tema de desarrollo energético. Asimismo, el intercambio con otros grupos comunitarios (Movimiento Ríos Vivos, Coordinadores de Lucha Ambiental Norte-Norte y Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en Puntarenas, Organización de Luchas Campesina por nuestras Tierras del Sur de Fincas 9 y 10 de Palmar Sur de Osa de Costa Rica y el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Bajo Aguán Honduras Bajo Aguán, Honduras) ha posibilitado la sensibilización en otras temáticas ambientales y sociales (tenencia de la tierra, construcción de otros megaproyectos, derechos humanos) llevando a que la Comisión Defensora se convierta en referente nacional tanto en la defensa del agua como en otras luchas ambientales, tanto nacionales como regionales a nivel centroamericano.

Comunidades que luchan por el agua en Puntarenas

Por Dany Villalobos Villalobos (*)

Se han cumplido ya nueve meses de la formación de la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en el cantón Central de Puntarenas y los movimientos comunales de lucha por la justicia en el acceso y la distribución del agua de esta zona empiezan a ver los frutos de su trabajo organizado. La semana pasada se celebró una gran victoria para la comunidad de Guacimal en la defensa del río Veracruz, al fracasar un proyecto de riego impulsado irregularmente por un convenio público-privado, entre Senara y la Sociedad de Los Ángeles, que usaba un Decreto de Emergencia para vencer a la oposición del pueblo de Guacimal y llevarse el agua sin estudios ambientales.

En el 2015 habíamos logrado que en La Pita de Chomes se recuperara el acceso al agua, tras haberse secado su pozo, haciendo presión junto con la Asada local en el AyA de El Roble, que dormía en sus oficinas mientras la gente de La Pita solo podía llenar unos baldes de agua sin tratar que se repartía con el chapulín de un vecino.

()Miembro de la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico de Puntarenas*

Lamentablemente aún hay dos pequeños ríos afectados por proyectos de Senara: el Aranjuecito y el Acapulco. Y en la parte baja, las haciendas y sus actividades agroindustriales hacen fiesta desviando o sobreexplotando los ríos para regar piñeras, cañales, algodón transgénico y palma aceitera, que se nutren de altas dosis de agroquímicos y amenazan la calidad del agua para las comunidades y la vida del manglar. Además, hay problemas aún de desabastecimiento en varios poblados que hay que afrontar con solidaridad entre comunidades y presión a las instituciones.

Comenzamos a difundir nuestros motivos para estar organizados por el agua gracias al apoyo de los medios de la Universidad de Costa Rica. Este 2016, junto con el Trabajo Comunal del programa Kioscos Socio-Ambientales de la UCR estamos mapeando el panorama social y ambiental de Puntarenas en relación con el agua, para poder identificar las acciones de la Alianza que impulsen la organización comunitaria y recuperar así la calidad de vida de los pueblos puntarenenses.

Se han hecho notables esfuerzos para poder movilizarse a exponer estas problemáticas a las dependencias del Ministerio de Ambiente en San José y a la Municipalidad de Puntarenas. Rifas, cocinadas comunales y donaciones de vecinos han sido la muestra de la autodeterminación que tiene la gente para nadar contra corriente. El acercamiento con las instituciones deja grandes críticas al trabajo de estos órganos estatales, notándose su inclinación hacia la mercantilización del agua y su incapacidad de atender los planteamientos de las comunidades en este sensible tema.

Y es que en un país dominado por la mentalidad capitalista y la cultura del chorizo, se ha vuelto costumbre el favoritismo estatal hacia las demandas de los grandes te-

rratenientes y empresarios que se apegan a un trillado y vacío discurso de desarrollo para justificar su apropiación del agua. Grave error se comete al excluir a los pueblos rurales de la toma de decisiones, en este caso sobre el manejo del agua como bien social. Pero ahora los movimientos comunales puntarenenses seguirán escribiendo con acciones las nuevas páginas en esta historia. Ojalá la energía de estas luchas anime a otros pueblos del país a organizarse y luchar por algo que es propio: el agua.

Organización comunitaria en defensa del agua

Por la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador

Los pasados 16 de diciembre de 2015 y 16 de febrero de 2016, recibimos las noticias de que la Setena archivó los Proyectos Hidroeléctricos Monteverde II y I, respectivamente. Luego de casi tres años de lucha por parte de las comunidades de Longo Mai, Convento y Cristo Rey, representadas principalmente por la Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador, este logro da un nuevo aire para continuar. Nuestras comunidades podrán seguir haciendo uso del agua para el consumo humano, actividades recreativas y agrícolas, entre tantas otras. Además la vida del Refugio de Vida Silvestre Longo Mai no será afectada.

El camino no ha sido corto y mucho menos sencillo. Ya en otra ocasión se ha relatado la forma en que nace nuestro grupo, las diferentes formas de accionar por medio de la educación ambiental y nuestra vinculación con otros grupos como ejes de nuestro quehacer (Semnario UNIVERSIDAD 8/9/15). Esto nos permitió un caminar continuo, oponiéndonos a los intereses privados cuyas consecuencias afectarían los ecosistemas, los medios productivos de los que dependemos, el uso del río como medio recreativo y además el acceso al agua para el consumo humano.

El nuestro es solamente uno de los ejemplos de defensa del agua que se están dando a nivel nacional como respuesta a las diferentes amenazas que están viviendo nuestros ríos. Junto a esta victoria de las comunidades podemos mencionar la gran lucha que dieron y lograron las personas de la comunidad de Guacimal, quienes a partir de la organización y la valentía, evitaron que los intereses de unas pocas personas se antepusieran a los de las demás. Además de esto, se ha gestado un proceso de vinculación y concientización en las comunidades, principalmente en la zona sur del país, que ha llegado a generar cerca de 15 grupos organizados cuya labor continua apunta a la protección de nuestros ríos.

El trabajo que realizamos no termina aquí. Sabemos que la defensa del agua en la situación actual del país y el planeta no es algo de un día, unas semanas o unos meses. Por esto, desde hace casi un año, buscamos la articulación de procesos que garanticen la protección de nuestros ríos a largo plazo, como la formación de una Comisión para el manejo de la cuenca del río Convento, que permita a las comunidades tener incidencia directa sobre los usos de los ríos y asegurar que estos se den de forma justa y equilibrada con el ambiente. Finalmente, continuamos la vinculación y solidaridad con otras luchas comunitarias, que no solamente giran en torno a agua sino también a otras formas de defensa de nuestros territorios y que son formas de buscar una sociedad más justa para todas y todos.

Conflicto por el Agua en Guacimal: en lugar de acusar, debatir

Por Moisés Salgado Ramírez y Mauricio Álvarez Mora (*)

A la Vicerrectoría de Acción Social llegó una carta, una más con acusaciones contra el Programa Kioscos desde el actual Gobierno, en este caso por parte del Senara y del Ministerio de Agricultura, que se suman a una serie de misivas de la Junta Directiva de Fonafifo enviadas en meses anteriores. Extraña sobremanera que desde 2014 sean instituciones del Estado y no inversionistas o cámaras empresariales, como era usual, los que se “preocupen” por nuestro quehacer.

En el caso del Senara y el MAG se nos acusa de realizar acciones “belicosas”, “parar obras en el campo” y de “usar material tendencioso e inexacto” referido a proyectos de riego en el Pacífico Central. Sobre estas aseveraciones ya puntualizaremos en el momento y espacio adecuados.

En el caso de Fonafifo, llamó a cuentas al Vicerrector de Acción Social para que diera explicaciones acerca de nuestros cuestionamientos al mecanismo REDD en territorios indígenas y su proceso de construcción (<http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/opinion/13331-indigenas-denuncian-irregularidades-de-representatividad-en-proceso-de-preparacion-a-redd.html>).

(*)*Docentes del Programa Kioscos Socioambientales.*

La respuesta del señor Vicerrector fue invitarlos a debatir sobre el tema con las comunidades involucradas, por cierto aún esperamos después de muchos meses, la respuesta por parte de Fonafifo a dicha invitación.

La misma forma ha operado: por medios oficiales, incluso extraoficiales, se le externa una queja a una jefatura, pero no solicitando un espacio de diálogo directo con los docentes responsables del Programa Kioscos donde se expongan las discrepancias o se conozca a fondo nuestro quehacer académico.

Kioscos Socioambientales tiene claro su papel académico-universitario desde donde hemos realizado diversas actividades para el diálogo a lo interno de las comunidades y con instituciones, por ejemplo las audiencias con el Ministro de Ambiente y comunidades de la zona norte afectadas por el monocultivo de piña, conversatorios entre la presidencia del AyA y dirigentes de Asadas y de igual forma, en el caso de Guacimal, donde atendimos una mesa de diálogo por invitación del Gobierno de Costa Rica.

Como ya lo hemos expuesto en esta columna, lo que presenciemos es un extravío del rumbo que suponía este Gobierno “del cambio” en política ambiental y comunitaria: el engaño con la moratoria de la piña (promesa aparecida en el PACto Ambiental), las fallidas negociaciones en Salitre y sus graves consecuencias para las mujeres indígenas, el cuestionado proyecto de riego en Pacífico Central, indagaciones de la Comisión de Control y Gasto Público contra Fonafifo (www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/55219/516/fonafifo-hace-pinata-con-recursos-publicos), la incapacidad del Gobierno de atender el conflicto de Chánguina como un problema agrario (ya aceptado por el Ministro de Presidencia), entre muchos otros.

Sin embargo, para Kioscos sí resultó ser el gobierno “del cambio”, porque lo cierto es que nunca antes habíamos recibido este tipo de presión por el Estado. Durante los dos gobiernos anteriores la cartas llegaban de empresas como Industrias Infinito, PH Parismina, Cámaras de Ornamentales, y de Productores de Piña o del Grupo Inteligo en Bahía Cocodrilo y Puerto Jiménez; representantes de la Marina Puerto Viejo, interesados en minería en Talamanca o de los interesados en el desarrollo inmobiliario de la Fila Costeña (Semana UNIVERSIDAD, 19-5-2009).

Todas fueron presiones y amenazas solapadas. Ninguna se concretó en una acción legal pero se dan en un contexto donde cada vez más defender el ambiente o los derechos comunitarios implica estigmatización, judicialización, amenazas, ataques y muerte.

El proyecto de riego en el río Veracruz ha sido paralizado por orden de la sala IV por la violación de la Constitución, gracias a la acción emprendida por la comunidad de Guacimal autónoma y con capacidades propias de hacer valer sus argumentos, sin embargo por este caso se nos tilda que hemos sido “tendenciosos e inexactos”.

Lo paradójico es que la mayoría de jefes de las instituciones aludidas son exacadémicos de la UCR, por tanto deberían conocer y respetar los límites de la autonomía universitaria, asumir su investidura actual y finalmente no recurrir a la queja sino a la discusión, espíritu del ejercicio académico. Acusar no, debatir sí. Así ¡sí se vale!

Del Diquís a la represa “Chinis”

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Desde el gobierno pasado, se anunciaron “nuevos esquemas financieros” para el P. H. Diquís, lo cual, en la práctica, significa la desnacionalización del proyecto, aduciendo la situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (La Nación, 29/06/2012).

El argumento de restringir el endeudamiento (costos versus inversiones) no es nuevo, y tiene que ver con la intención de entregar a las transnacionales las partes más rentables que sobreviven en el ICE (Ambientico, #226 Agosto 2012, p.14). Como quedó claro, existió la voluntad de entregar el P. H. Reventazón y recientemente el P. H. La Perla, amparándose en la Ley (N.º 8660).

Lo nuevo es el interés de los chinos en el Diquís o, más bien ¡Chinis!, que pareciera haberse disimulado muy bien por la precaria situación con los negocios “de” y no “con” China y la compra de bonos de Costa Rica (Diario Extra, 2-3-16).

Los negocios son “de” China, pues han llegado tan a su medida y beneficio; han sido tan malos negocios “con” el país, que hasta los mismos políticos se ruborizan y se preocupan de nuestra suerte ante la voracidad china.

(*) Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

Un Acuerdo Bilateral de Inversiones (ABI) con China, aprobado en días recientes, les asegura que, de ahora en adelante, proyectos como la refinería y la ruta 32 serán cobrados “de pe a pa”. A los chinos les quedó claro que acá necesitarán los mecanismos de extorsión del CAFTA, ya sea para aligerar sus negocios o para cobrar más fácilmente su indemnización.

Este nuevo “tratado”, que pasó sin mayor discusión pública, lo hacemos con la economía más voraz frente a los recursos naturales globales, interés que se plasma en la definición de inversiones y bajo la concesión para explotación de recursos, sometiéndonos a los tribunales arbitrales. Esto en la medida que se une a la prohibición de las “medidas equivalentes a expropiación”, donde los tribunales arbitrales han incluido una extensa variedad de acciones estatales como la aprobación de legislación ambiental, en defensa de derechos sociales y económicos.

Si le parece poco lo anterior, el acuerdo con China legaliza las formas de esclavitud y las formas de violación de los derechos laborales que los inversionistas quieran para sus coterráneos, que no gozarían de los derechos y garantías laborales, al aducir que “nuestra legislación laboral limita los rendimientos económicos de su inversión” (Frente Amplio, 29-03-2016).

Volviendo a los bonos chinos, en una serie de publicaciones (Diario Extra, 21 -4 -16 y Diario Extra, 23 -4 -16) que enojaron al presidente, se desvela una negociación directa y secreta de Solís con su homólogo chino. El presidente negó los hechos, pero una entrevista con el ministro de Hacienda sembró la duda.

Para otros sectores, como los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, la alarma está en que proyectos como la ruta 32, el Diquís y la refinería estén en los su-

puestos condicionamientos de la negociación de compra de los bonos para paliar la “difícil situación fiscal” aducida por Solís.

Cierto o no, la información desvelada empieza a calzar con una serie de acciones que podrían ser parte de estos condicionamientos: primero, la aprobación del tratado para asegurar futuros proyectos como el Diquís u otros que han quedado dormidos, como el acuerdo con la compañía estatal china China National Petroleum Corporation(CNPC), que liga la refinería con la extracción petrolera. Segundo, el anuncio y aceleración del protocolo de consulta de pueblos indígenas, con el claro objetivo de tener la llave para extraer recursos y hacer megaproyectos en estos territorios. Tercero, el discurso del MINAE, que prepara el terreno para anunciar una nueva fórmula mágica que reviva la moribunda refinería China (crhoy.com; 7-5-16).

A estas tres medidas es probable que se unan nuevos anuncios y condicionamientos en relación con la ruta 32, entre otros que se mueven en las sombras del secretismo que ha caracterizado desde el inicio la relación con China, como quedó en evidencia con la “chinificación” del Diquís.

Están secando más ríos: Abangares, Guacimal, Aranjuez, Aranjuecito, Acapulco y Lagarto

Danny Villalobos Villalobos (*)

Las primeras lluvias se volvieron nada en la aridez que dejó uno de los veranos más secos que se recuerden, con una disminución del 75 % de lluvia. Esta situación se suma a la injusticia en la repartición de aguas, al tiempo que es efecto de esta.

En el Pacífico Central –al igual que en el resto del país– la mayoría del agua está siendo mal distribuida, desperdiciada y sobreconsumida por el riego de la ganadería, piñeras, palma, algodón y otros cultivos de grandes propietarios y transnacionales.

“Las instituciones son inexistentes. Solo corren y existen para defender el estado injusto de la distribución del agua y perseguir a las comunidades que se organizan contra esta situación”, aseguran las comunidades y organizaciones agrupadas en la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en Puntarenas.

(*) Miembro de la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en Puntarenas.

En los últimos días, las Asadas y vecinos de Malinche, Judas, Chomes, Abangaritos, Abangares Lagarto, Orocú, Cocorocas, Costa de Pájaros, Morales, que dependen de pozos hechos a la orilla de ríos como Lagarto, Guacimal, Aranjuez y Abangares, se han integrado a la Alianza y han dado otro paso al frente en la defensa de los ríos de la zona.

Mientras las comunidades se han unido para defender el patrimonio natural del pueblo costarricense y del planeta entero.

El Senara, MAG y Minae trabajan bajo la “ilógica” de que el agua que llega al mar es un desperdicio y parten de la obsoleta premisa de que el agua es inagotable, estas instituciones se han convertido en los principales promotores de conflictos socioambientales en zonas con proyectos de riego, sin propiciar participación o fiscalización de las comunidades y dando permisos sin suficientes estudios.

Lo sabe Guacimal que detuvo la seca del Río Veracruz y lo saben los vecinos de Aranjuecito y Santa Rosa que vieron secarse nuevamente sus ríos Aranjuecito y Acapulco provocando la muerte de peces en las últimas semanas, mientras el agua había sido desviada para que corriera por potreros y piscinas de los beneficiados de proyectos de Senara.

Todo esto mientras ambas comunidades tienen problemas en el abastecimiento del agua para consumo humano que podrían ser resueltos en parte con esos ríos tal y como plantean sus Asadas.

A las amenazas que implican los proyectos de riego en las partes altas, se suman la minería y tajos en ríos cercanos a los pozos de cientos de familias.

Además se cierne sobre los ríos otra amenaza: las presas o tranques ilegales que desvían el agua a fincas privadas en los últimos diez kilómetros del río, justo cuando el caudal está a punto de llegar a los manglares de los que depende la sobrevivencia de comunidades costeras y pescadoras.

Al río Guacimal en su parte baja lo afecta la extracción excesiva de agua para riego concesionada a haciendas explotadas por la piñera Banacol, sin que existan estudios para garantizar la sostenibilidad ecológica.

Por si fuera poco, una nueva empresa llamada Inversiones Pétreas del Guacimal intenta obtener permisos para explotación del cauce del río Guacimal.

Las Asadas de Judas y Chomes están preocupadas por los efectos adversos que puede traer esta explotación de materiales en sus pozos, amenazando con afectar la calidad del agua de los dos poblados.

El río Abangares simplemente no llega al mar afectando otros usos como el agrícola o ecológico del río, esto por voluminosos desvíos ilegales en los márgenes de este río. También amenaza la estabilidad socioeconómica de los agricultores de la zona.

Oficialmente solo se reportan dos concesiones otorgadas que tienen permiso de explotar 90 litros de agua por segundo en total, cantidad que puede ser incluso mayor a la observada en una reciente visita de miembros de la Alianza al río, donde se documentó un “desvío ilegal de aproximadamente el 40 % del agua hacia una finca privada al margen oeste del río.

La misma propiedad ha invadido el área de protección del río (15 metros del cauce principal según la ley forestal), con quema y corta de árboles, observándose la destruc-

ción de árboles adultos como un ejemplar de Guanacaste y uno de Panamá”. Además, los vecinos denuncian la destrucción provocada por la minería y extracciones de materiales legales e ilegales en el río.

En cuanto al río Lagarto, a pocos kilómetros de ahí tampoco llegaba al mar en días anteriores. Pero la liberación de la presa ilegal en presencia de la fuerza pública y de otras 3 presas más en el trayecto del río, junto con las recientes lluvias caídas en la zona logró recuperar el caudal y vuelve a normalizarse de momento la situación.

¡Guacimal bebió de su río conciencia y valentía!

Mauricio Álvarez Mora (*)

Al pueblo de Guacimal que me enseñó a leer y beber del agua de sus ríos, a su “Quijote” soñador, medidor y defensor de ríos, que me puso a bailar y luchar al son de marimba y a una pequeña gran mexicana que parece amar más Costa Rica que muchos nacidos en este terruño.

Dicen que sus ríos nacen en los montes verdes con agua bendita de vida, yo creo que el agua que corre por Guacimal viene cargada de valentía y sabiduría.

No importa la manera en que estos dos ingredientes se ingieran, ya sea respirados o bebidos a la orilla del río o en forma de ricos chapuzones, o como lluvia que refresca la piel y hace crecer los frutos que alimentan a la misma comunidad, despiertan a su vez conciencia y dignidad.

La comunidad de Guacimal reconoce su simbiosis con los ríos, por eso ha sentenciado, con una nobleza y un sentido de justicia encomiable, que está dispuesta a compartir su agua con otras comunidades sedientas de estos valores, pero no para el desperdicio y abuso en la distribución del agua.

Está anuente a compartir los beneficios de su agua “milagrosa”, pues ha sido buena guardiana y gracias a su relación con el río ha podido usarlo y cuidarlo para que

()Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

hoy exista sano, en contraste con la cruda realidad de muchas comunidades aledañas en crisis por falta de fuentes de agua.

En 2015 Guacimal nos dio una lección de solidaridad: logró una “agua- determinación” talvez inédita en su historia, defendió el agua para su futuro compartiéndola en el presente con comunidades vecinas, tal es el caso de La Pita de Chomes con la que realizó una gestión conjunta que permitió que esta comunidad vecina que pasaba meses sin agua, pudiera tener acceso conectándose a su acueducto. Es decir, están haciendo cumplir la ley que prioriza el agua para el consumo humano.

Y en 2016 nos dio una lección de fe, astucia y perseverancia al lograr la paralización del proyecto de riego que ya había empezado su construcción y que amenazaba la existencia del Río Veracruz, por medio de un fallo de la Sala IV.

¡Con su valentía y conciencia ganó esta batalla! El festejo no se hizo esperar, la comunidad se organizó pero esta vez para celebrar, y el corazón de Guacimal latió como marimba y su alma valiente bailó, el río tuvo cosquillas por el regocijo de sus peces que lo cruzaron juguetones de arriba abajo, la nutria del río seguramente aplaudió y el “martín pescador” llevó la noticia de árbol en árbol avisando que la maquinaria destructura paró, ¡qué no secan el río! cantó; camarones, tortugas, ranas, raíces y hojas también celebraron sabiendo que no solo están recuperando el río si no a esa otra especie, la nuestra, que hace siglos perdió su conexión con el resto.

Participación. El problema central de este conflicto no es que la comunidad de Guacimal no quiera compartir el agua sino es cómo, con qué criterios y quiénes deciden la administración de un bien común cada vez

más escaso, sabiendo que ni se usa ni se distribuye con justicia en Costa Rica, que faltan estudios para su debido manejo, así como participación de las comunidades en las decisiones.

No hace falta mucho tiempo en Guacimal para reconocer que su gente siente la necesidad de defender y amar el río, más allá de ser su eje de subsistencia y cualquier cálculo económico, sino porque su identidad nace, crece y se mueve con sus ríos, no hace falta ser anfibio o árbol de ribera para ser especie de río. Hace décadas no veía un pueblo con tanta dignidad y decisión, tiene la magia del mismo movimiento del agua: continuo y cambiante.

Guacimal con su gente de agua tiene una inteligencia y sabiduría que urge ser conocida y aprendida por todas y todos. Es un laboratorio abierto para la defensa del bien común, del sentido de la solidaridad y de pertenencia, no a un pueblo, sino al planeta.

Reencontraron su sentido de comunidad y caminan de manera colectiva hacia una nueva cultura de gestión comunitaria agua. La comunidad de Guacimal se reconoció a si misma como sujeta de su historia. Está rompiendo con la inercia del “mal desarrollo” que vacía las comunidades rurales, donde el futuro es irse, renunciando a lo que es y entregándose a una mazamorra uniforme pero individualista y desarraigada.

El pueblo de Guacimal escribió nuevas páginas en su historia que develan su esencia de amor por la vida. Ya no podrá ser un pueblo de paso sino un destino final para los que tenemos sed de justicia y nos gusta beber de otros saberes para un mundo mejor.

Berta Cáceres y el ICE transnacional: A 16 años del Combo eléctrico ¿dónde está el ICE que defendimos?

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Sirva otro aniversario más del Combo para que el ICE, las fuerzas políticas y sociales empecemos a debatir: ¿por qué el ICE expande sus negocios fuera de Costa Rica justo donde existen graves conflictos socio ambientales y violación abierta de derechos humanos?, y en Costa Rica ¿por qué insiste en favorecer las hidro-oligarquías privadas?, ¿pretende ahora comportarse como una transnacional más?, ¿qué papel debe jugar entonces nuestro país y en especial el ICE ante esta indiscutible nueva realidad regional de guerra por los recursos?

Nos tragamos las lágrimas por el asesinato de Berta, llega el momento de identificar responsables en nuestro país, sí en Costa Rica. Hay que decirlo claro: el ICE está interesado en iniciar proyectos para represar ríos ensangrentados -no sólo por el asesinato de Berta-, que despojan de sus tierras a campesinos y pueblos originarios por sobre las leyes que les protegen y comprometen el bienestar socioambiental de un país en función de intereses privados.

(*)Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

El ICE parece estar dispuesto a hacer lo que no ha podido en Diquís, Talamanca o Duchi, nombre en cábecar de nuestro Río Chirripó. Esto, en la jerga transnacional, se llama doble estándar: consiste en hacer en el extranjero lo que no se puede hacer legalmente en el país de origen. El conflicto no sólo ético si no legal reside en dos aspectos: por un lado si el ICE hizo o no la consulta indígena qué corresponde y cómo corresponde y por otro, si construirá represas que están destinadas a proveer de electricidad no a la población hondureña, si no a la nefasta minería de oro a cielo abierto a cual el dueño del ICE, es decir el pueblo costarricense, dijo NO de manera rotunda logrando que esta actividad se prohibiera por la Ley 8904 en nuestro país.

Para echar a andar esta transnacionalización, entre otras acciones, el ICE y la cancillería firmaron un convenio marco para promover la “exportación de servicios y productos” (Presidencia, 22-2-16); mientras el presidente Solís estuvo en diciembre pasado en Honduras, evaluando las opciones de proyectos en ese país donde la vida parece no valer nada (Presidencia, 17-12-2015).

Ríos de Sangre. Según el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), son 41 los asesinados desde 2005. Sin embargo, ampliando las fechas y profundizando en la búsqueda, la cifra se eleva a 50 defensoras y defensores de los ríos que han sido asesinados por oponerse a proyectos hidroeléctricos en México, Centroamérica y Colombia. En detalle: Guatemala (17), Honduras (14), México (8), Colombia (7), Panamá (3) y El Salvador (1) (ver lista). Entre estos 50 asesinatos hay 4 de mujeres y por los menos dos de menores de edad (11 y 13 años). Los años más sangrientos fueron el 2013, con 10 asesinatos, y el 2014, con 12. Reglón aparte merecen los 27 sindicalistas colombianos asesinados en conflictos con Unión FENOSA.

En Honduras los 14 asesinatos por la defensa de los ríos están vinculados a los siguientes proyectos hidroeléctricos: Agua Zarca, Babilonia, Los Encinos, Las Minitas, Aurora y Agua Blanca. Algunas de estas personas asesinadas contaban con medidas cautelares interpuestas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos 14 casos solo se refieren a los defensores de ríos. Según un estudio de la organización Global Witness, los asesinatos entre 2002 y 2014 por conflictos de tierra y minería en Honduras son 111, lo cual hace que este país tenga el índice per capita más alto de todos los analizados por esa organización, lo que lo convierte en la nación más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el ambiente.

Además, resulta dramático que dicho estudio revele que, durante este período de 11 años, solo en 10 de los casos hubo alguna condena.

Honduras se perfila como la segunda nación (2002-2014 según estudio de “Global Witness”, 2015) con mayores asesinatos después de Brasil. La región Latinoamérica registra la mayoría de los asesinatos de ambientalistas: 702 casos; es decir, alcanza el 77%. Tomando en cuenta también el año 2015, en Centroamérica tenemos 146, en México 45 y en Colombia 80. Se trata en total de 271 asesinatos, dos de esos casos se dieron en Costa Rica, pero muchos otros ocurridos también en nuestro país no están en esas estadísticas o sucedieron antes del 2002.

El ICE en Honduras. Según trascendió medios de comunicación, el ICE evalúa participar, en el Departamento de Santa Bárbara, en los Proyectos Hidroeléctricos (PH) Santa Lucía (Municipio de Quimistán), Joyas de la Laguna (Municipio de Naranjito), Rancho (Municipio de

Atima) y Ojo de Agua (ubicado en una franja que abarca el municipio de San Esteban, Departamento Olancho, e Iriona, en el Departamento de Colón). Otros dos proyectos ya construidos son el Cañaveral y Río Lindo, donde se realizaría reconstrucción y modernización de las plantas (Semanario Universidad, 14-12-16).

Es muy fácil encontrar información acerca de los conflictos que están vinculados a estos proyectos que pretende asumir el ICE. El PH Ojo de Agua, sobre el afluente del Río Sico, afecta la comunidad Garífuna de Ojo de Agua de Iriona, Colón (ACI, 2013). En el municipio de Santa Bárbara, donde se ubicarían 3 proyectos de interés del ICE, se ha denunciado la matanza de campesinos y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, en especial durante el periodo posterior al golpe de Estado. En la construcción de proyectos hidroeléctricos se ha denunciado falta de participación y conflictos en los Valles del Norte de Santa Bárbara (ver más en <http://cespad.org/sites/default/files/Informe%20de%20represas.pdf>).

¿Energía para qué? Toda esta energía que el ICE estaría ayudando a producir está en función de los intereses del poder fáctico reinante en Honduras: enriquecer más a la sanguinaria clase política hondureña y suplir la locomotora minera que arrasa este país, y en especial al departamento de Santa Bárbara, donde en el 2013 existían unas 51 concesiones otorgadas de minería metálica (oro, plata, zinc, plomo, etc.) y otras 39 en trámite. Los datos en 2015 son alarmantes, se cuenta 44 concesiones para exploración de oro, 37 de plata, 23 de zinc, 23 de plomo y 21 de polimetales (La Prensa Honduras, 9-7-2015). Según la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, más del 35% del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, a las 300 nuevas

concesiones mineras se suman 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas, por lo que aseguran que el 50% del territorio hondureño se encuentra en manos de la industria extractiva (Radio Progreso, 26-2-2016).

Violar el convenio 169. No es casualidad que el estado Hondureño, tal y como han denunciado las organizaciones indígenas, haya pisoteado el Convenio 169 de la OIT desde el momento que fue ratificado (1995) hasta ahora (Informe de Pueblos indígenas ante CIDH, 2013).

El ICE pretende incursionar en el PH Patuca III, que se benefició del apoyo y las leyes aprobadas con el golpe de Estado (2009), las cuales permiten no consultar a los pueblos indígenas Tawahka, Miskito, Pech y Garífuna. Un estudio independiente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en relación con la construcción de la hidroeléctrica, concluye “con relación al proceso de consulta realizado para el Proyecto III por la ENEE, podemos resumir que durante la realización de las mismas con el pueblo Tawahka y Miskito, ambos se manifestaron en contra del proyecto, debido a que consideran que uno de los impactos es el descenso del caudal del río afectándose la navegación por el mismo río, única forma de comunicación relativamente rápida a sus territorios”. Cabe la pregunta que se hace siempre a las transnacionales ¿bajo qué ley operará?, ¿con la ley de cuál país?, pues resulta fácil decir que cumplirá las leyes, pero ¿cuáles estándares internacionales cumplirá? o simplemente, con los legalismos del caso, ¿operará con la ley que menos requisitos tenga?

Si se revisa cada uno de estos proyectos que el ICE evalúa, por supuesto que no todos se ubican en territorios indígenas o en áreas protegidas, pero se trata de cuencas de poblaciones sumamente pobres, que no tienen servicios

y que su acceso al agua son los ríos. Aunque estas poblaciones no estén organizadas por terror, o no haya un muerto en cada proyecto, están insertas en una guerra para despojar a las comunidades de los bienes comunes, y lidian con un Estado dominado por los intereses de la clase dominante que impone el proyecto a un costo de permanentes violaciones a los Derechos Humanos.

Si se revisa los informes de Derechos Humanos (ACI, 2013 y CIDH, 2015), se concluye que si hay una comunidad o un sector social que intenta discutir, participar o cuestionar, se convierte en blanco de la criminalización, estigmatización y, finalmente, terrorismo de Estado, ya sea a través de actividades paramilitares o de otras formas de violencia disfrazada, como las maras o la delincuencia común.

El ICE en El Salvador. El ICE anunció la firma de un contrato para supervisar la construcción del PH El Chaparral, ubicado en el Río Torola, en la zona oriental de El Salvador, según informó el gobierno (Gobierno.cr, 21 -3-16). Este proyecto ha visto pasar 4 gobiernos desde su inicio en 1997, y su construcción 2008 fue paralizada por problemas constructivos desatados por las tormentas Ágatha y Álex. Desde su inicio, sufrió un vía crucis por la opinión de las comunidades, dado el desplazamiento de cientos de familias y la afectación de miles más, la falta de transparencia, la corrupción y la politización.

Nuestra responsabilidad y defensa del ICE. A orilla de estos ríos caminamos junto a sus defensores, estuvimos con Berta y muchos otros líderes de la región, en distintos foros y eventos donde compartimos nuestras luchas y logros. Con muchos y muchas que hoy están junto a Berta, con comunidades sin más esperanza que ser expulsadas de sus tierras y arrinconadas en cinturones de pobreza y renunciar a su cultura por haber perdido su recurso más valioso.

Como ecologistas, hermanos y hermanas de Berta y esta larga lista de asesinados, no podemos consentir que el mismo ICE que defendimos en las calles actúe ahora como cualquier otra transnacional, amparándose en el “yo no fui” y ocultándose tras un rol de “asesoría técnica”.

El asesinato de Berta devela la guerra de “alta intensidad” por la defensa de los territorios, ante los intereses por vaciarlos, ocuparlos y extraer todos sus recursos. Los activistas y líderes son blancos de combate. En “combo” vienen la minería, las represas y las maquilas. Este es un círculo vicioso de muerte: producir electricidad para consumir energía en la extracción de minerales y desplazar y fragmentar a las comunidades alimentando pobreza y germinando violencia en forma de maras, crisis humanitaria con migraciones que terminan en una maquila si no mueren en el camino de terror hacia el Norteamérica, se recrudecen las expresiones de xenofobia y homofobia y donde mujeres y niños se vulnerabilizan aún más.

¿Por qué decimos que el ICE se comporta como una transnacional? Primero porque el ICE y el país no deberían recibir inversión y asociarse con empresas señaladas por asesinatos y otras violaciones a los Derechos Humanos en estos países, como la empresa China Sinohydro Corporation o la española Unión Fenosa.

Segundo, porque su simple presencia tratará de utilizar su imagen para mejorar proyectos que se dan sin cumplir los mismos requisitos o estándares de nuestro país. El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW).

Como si fuera poco, antes, el ICE trató de “maquillar” frente a la Contraloría un nuevo Proyecto Hidroeléctrico -La Perla, de 17 MW- pero el refrendo del contrato ha sido rechazado en 3 ocasiones. Para la Contraloría, el ICE no ha podido garantizar que dicha represa será independiente del PH La Joya, perteneciente a la empresa Unión Fenosa. Este último, limitado por la Ley 7200, solo podría comprarle 50 MW, por lo cual ampara este nuevo proyecto bajo la Ley 8660 que le permite firmar un contrato donde es el ICE el que produce energía (en una planta que es propiedad de FENOSA) y no paga por el concepto de compra de energía sino por el pago del diseño y construcción, además de una cuota periódica por concepto de operación y mantenimiento (Diario Extra, 22-3-2016).

Sobre esto, cabe preguntarse: ¿Qué pasó con la investigación (Fiscalía de Delitos Económicos) sobre un “premio” por \$25 millones recibido por el exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo, de parte del exdiputado socialcristiano Gerardo Bolaños, vinculado con la adjudicación del PH La Joya a FENOSA en el año 2000? (Al Día, 2- 12-2000). ¿Cómo funciona este sistema de “premios” en su esquema de negocios internacional?

Tercero, la medida sin mayor consenso o discusión es generalizar la exportación de electricidad a gran escala. Para ello, se realizó una mega inversión (US\$ 494 millones) en interconexión eléctrica (SIEPAC) y se habla abiertamente de la exportación como “conveniencia nacional”, independientemente de quien lo haga (Costa Rica Hoy, 2/7/2012). Por ejemplo, para junio del año pasado, el ICE exportó más de 6 millones de dólares en electricidad a toda Centroamérica, que si bien son excedentes, es un gran banquete que están esperando devorar las transnacionales y los generadores privados. (crhoy.com, 1-7- 2015). Este sería una de las grandes motivaciones

para que se insista en la Ley de Contingencia u otra más aperturista, que permita la exportación privada de electricidad, potestad que hoy solo tiene el ICE.

Cuarto, cuando vemos que el ICE pagará 95 000 millones de colones a los generadores privados por compras de energía; es decir, un incremento de 32 000 millones con respecto al 2014, y que ese monto lo pagamos todos y todas, tenemos claro que la generación privada local y transnacional (FENOSA) es un gran negocio y que sus dueños aún conservan su capacidad para influenciar políticamente la toma de decisiones técnicas en el ICE. ¿Engorda el ICE con nuestra plata las billeteras de dos ex-presidentes, que las usarán para campaña política y ser elegidos una vez más y aprobar leyes que los beneficien tal y como lo hicieron en el pasado?

Quinto, en su relación con los conflictos domésticos por energía privada desatados por sus licitaciones (Upala, Perez Zeledón, Coto Brus, Buenos Aires, Acosta y Perez Zeledón), el ICE ha actuado siempre favoreciendo a los empresarios privados. Por ejemplo, en el Sur del país, las comunidades quisieron conocer los expedientes de los proyectos elegibles, y no pudo ser más desatinada la respuesta del ICE, que les pidió una cédula jurídica (a comunidades que no dudaron para estar en las calles contra el Combo). Estas comunidades ha visto como el ICE dio varias prórrogas para el archivo del PH Consuelo, pasando por encima de criterios de otras instituciones como SETENA, MINAE, AyA y ARESEP que cuestionaron dicho proyecto (ver más).

Sexto, estas empresas que el ICE beneficia y antepone a las comunidades, amparadas en las leoninas Leyes 7200 y 7508, con razón o sin ella, demandan legalmente para tratar de cobrarle al ICE, o sea al pueblo de Costa Rica, unos 241 millones de dólares por atrasos, sobre-

costos y otras medidas tomadas en la construcción de las obras adjudicadas. Entre estas empresas se encuentran: Hidroenergía del General, PH Parismina, PH Chucás, Hidrotárcoles, Unión Fenosa y Generadora La Joya. Sí, Unión Fenosa, a la que el ICE le pretende otorgar el nuevo proyecto La Perla. Ante esta información surgen preguntas como ¿por qué se premia con otro proyecto a compañías que operan de esta forma?

Ya hay una limitación impuesta al ICE para no construir obra pública, condenándolo a su especialidad de construir represas en Costa Rica. El ICE no ha dado el salto para el recambio abordar otros proyectos diferentes a las represas e incursionar en otras energías y en proyectos a otras escalas. Se le agota el tiempo para redefinirse y adaptarse al contexto.

No hay, a corto plazo, un plan para convertir el ICE en un instituto de energía que supere la hidroelectricidad, sino que se busca profundizar en la construcción de represas, ahora fuera del país. Esto debió desatar un debate profundo, así como abrir la llave de la exportación de electricidad o seguir financiando la hidro-oligarquía nacional y ahora la centroamericana.

Con estas decisiones, el ICE se pone en una situación insostenible como empresa nacional. Perderá apoyo social de sectores sociales y ambientales, quedará expuesto y con responsabilidades penales y jurídicas sobre las decisiones de tipo transnacional que logre, por su resistencia a adaptarse a los nuevos tiempos y por su “precisa” en mantener una planilla con una alta especialización hidroeléctrica.

¿Es imposible entender que el ICE podría apropiarse totalmente del mercado de la energía solar en nuestro país brindando este servicio público? La producción de

paneles solares térmicos y fotovoltaicos en el país ya tiene más de una década. La han venido realizando pequeñas empresas nacionales que podrían compartir sus aprendizajes con el ICE. En un futuro cercano, prácticamente todas las casas de Costa Rica y de Centroamérica, al igual que los diferentes procesos productivos poseerán, este tipo de tecnologías. ¿Es que acaso en este gigantesco negocio el ICE no puede reclamar su espacio?

Esta aventura transnacional aislará al ICE de todos los costarricenses, de muchos sectores, que lo hemos defendido críticamente, y colocará a esta empresa de todos los costarricenses exactamente donde han querido sus enemigos pro privatización. Pareciera que el ICE está entrando en una trampa de donde solo saldrá privatizado o disminuido a su mínimo expresión.

Esperamos contribuir a que se genere un verdadero debate. Y que quede claro: si el ICE insiste en este trato de transnacional, le daremos campañas internacionalizadas, boicot a sus servicios y productos, acciones legales a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acciones directas y todo lo que sea necesario para que estas reglas, que hemos diseñado en la democracia costarricense, rijan la forma de hacer negocios del ICE en Costa Rica y fuera de nuestro país.

Si el ICE quiere redefinirse estaremos en primera línea asesorando y colaborando para que retome su inteligencia y grandeza, yendo por un camino sustentable, un camino de vida en tiempos de muerte.



MONOCULTIVOS Y SAQUEOS

Escenarios políticos: la ruta de la expansión piñera se fortalece

Por Karina Valverde Salas (*)

El 13 de octubre del 2014, el Ministro de Ambiente recibió un documento entregado por personas de Los Chiles, Guatuso, Upala y Guácimo que consistía en la solicitud de declaración de moratoria para la expansión del monocultivo de piña a nivel nacional. La elaboración de dicho documento se hizo en conjunto con líderes de las comunidades mencionadas. Se entregó en una audiencia que el mismo Ministro les dio, fue recibido por él pero no acogido porque dijo que lo pasaría a sus asesores y abogados para que lo revisaran porque, según él, tenía que ir “blindado” para que la Sala IV no se “lo traiga abajo”, como sucedió con las declaratorias municipales de Pococí y Guácimo.

Después del seguimiento dado, se otorga por el Ministro una nueva audiencia, el 11 de junio pasado. El asunto para tratar parecía obvio: darían a las personas una respuesta sobre la declaración de moratoria y cuál había sido su trabajo en las mejoras al documento. Sin embargo, no fue así.

Este es un extracto del montaje-teatro de estos espacios políticos: – reciben a las personas, entra el Ministro, hace un saludo cordial y no sabe por dónde va el guión de la

(*) Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

obra, pasa la palabra a su asesora y de forma improvisada ceden la palabra a las y los líderes comunitarios. Las personas insisten en las consecuencias negativas de la expansión piñera reflejada en la contaminación de ríos y fuentes de agua debido al lavado de los suelos que están contaminados por el uso de agroquímicos, a la tala de árboles, al secado de los humedales por el drenado que se usa para el riego, a las condiciones laborales precarias, a las enfermedades mortales vinculadas a todo lo anterior. Le dicen al Ministro que él debe hacer algo y le reclaman su incumplimiento de ir a visitar sus comunidades y ver las cosas “con sus propios ojos.”

Su respuesta fue: “Me solidarizo con ustedes”. ¿Eso qué significa?, ¿Que el reconocimiento, porque no puede alegar desconocimiento sobre los impactos de la expansión piñera, es a pura solidaridad sin decisiones ni acciones? Y después de indicar esto dice que dará la palabra a unos funcionarios que estaban en la sala para que rindan un informe de lo que han hecho. Los presentes no entendemos nada, ya la obra se tornó algo absurda. El Ministro, se pone en pie, se disculpa y sale de la sala porque tiene otra reunión importante. Esos funcionarios entonces comienzan con su exposición sobre lo que están haciendo, todo es más confuso ahora, el Ministro, saliendo, aprovecha para decir: “No se puede asumir una moratoria sin antes tener bien definidos los terrenos aptos y no aptos para sembrar la piña”, que gran cosa están haciendo entonces, pero si en Costa Rica se siembra piña desde la década de 1980 y ¿hasta ahora el Minae quiere estudiar la aptitud de los suelos y Setena, como ha otorgado entonces la viabilidad ambiental a tantos proyectos? – Fin de la obra.

¿Exportar postres o producir alimentos?

Por José Julián Llaguno Thomas
y Verónica Martínez Sánchez (*)

Según el último Censo Agropecuario realizado en el 2014, aproximadamente un 47% del total de la superficie terrestre del país corresponden a fincas que son destinadas para la producción agrícola y pecuaria. Este dato da una aproximación de la importancia que tiene este sector para el país, por lo que vamos a aportar algunos elementos para reflexionar sobre la lógica general que rige una parte importante de esta producción, tomando como eje articulador, la agroindustria.

Dentro de este panorama, la agroindustria de exportación tiene un peso determinante en la composición total de la matriz económica, concentrando el 60% de toda la producción, que tiene como principales productos el banano, la piña, el café, la palma africana, las plantas ornamentales, la yuca y el melón. Según datos de la FAO (Tristán, 2012:217-222) la composición interna de cada uno de estos productos tiene una distribución muy disímil; mostrando una tendencia hacia la especialización y concentración en los casos de la palma, la piña y el banano. Las empresas Chiquita, Dole y Del Monte, controlan la casi totalidad de la cadena productiva de estos cultivos, desarrollando un esquema empresarial compuesto por filiales ubicadas en las regiones norte, sur y atlántica.

(*) Docente y asistente del Programa Kioscos Socioambientales.

El resultado de este crecimiento, se debe en parte a la promoción estatal a través de varios subsidios como los Certificados de Abono Tributario (CAT), el apoyo logístico y de comercialización del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la desestructuración del sector de granos básicos. Según datos del censo agropecuario del 2014, los monocultivos de exportación con mayor crecimiento desde 1984 son la piña, la palma aceitera y el banano con un incremento de 1.422%, 295% y 65%, respectivamente. Estos porcentajes en términos de extensión en hectáreas significan 37.660, 66.420 y 51.758. En contraste, los granos básicos han disminuido 32% en arroz, 52% en frijol y 73% en maíz. Esta disminución se refleja espacialmente en 58.540, 19.470 y 15.769 hectáreas respectivamente (INEC, 2014).

Algunas consecuencias de esta tendencia de promoción de la agroindustria de exportación ha sido el estímulo al crecimiento desmedido de los monocultivos en contraste con la producción diversificada, la reorientación del apoyo estatal a empresas transnacionales, el aumento en las importaciones de granos básicos y la presión por la tierra hacia los pequeños productores. Estos factores, aunados a la firma de decenas de tratados de libre comercio, han colaborado en desestimular la producción agrícola para el mercado interno, obligando a las y los pequeños productores a vender sus tierras, trasladarse de actividad económica o establecer contratos productivos y de alquiler de tierras con las empresas exportadoras.

Los casos más característicos de este esquema son los de la palma aceitera y la piña. En el primero la mayoría de la tierra cultivada está en manos de pequeños productores en el Pacífico Central y Sur del país que venden su producto a la empresa Palmatica, que es una división corpo-

rativa de Chiquita que controla el 60% de la producción y la casi totalidad de la comercialización. En el segundo caso, la siembra se concentra en las regiones norte, sur y atlántica con un esquema diferenciado territorialmente, en donde las empresas exportadoras controlan todo el proceso productivo en el sur y el atlántico, mientras que desarrollan el sistema de contratos con pequeños productores en la región norte. De continuar esta tendencia hacia la especialización, concentración y vocación exportadora de la agroindustria, el país corre el riesgo de depender de la importación para suplir las necesidades alimentarias de la población.

Monocultivos: ¿se muerden la cola?

Por Mauricio Alvarez Mora (*)

En los noventas, los límites a la expansión bananera los pusieron los ajustes del mercado y la propia frontera agrícola. El monocultivo del banano “topó con cerca”, es decir áreas protegidas y asentamientos del IDA.

Esos son los grandes límites externos con los que choca el agronegocio y su apropiación corporativa del territorio, pero no se queda de manos cruzadas y los presiona con toda la fuerza de su poderío político y económico, con el fin de aumentar la expansión de monocultivos en el país.

Sin embargo, la propia insustentabilidad de la agroindustria parece ponerle límites endógenos. Los monocultivos expansivos es una de las actividades humanas que más mella ha hecho en el deterioro ambiental del mundo y que más ha abonado por el cambio climático. Ahora la serpiente se muerde la cola, pero las consecuencias son para el mundo entero.

En Costa Rica existen ejemplos preocupantes: la expansión del monocultivo de la piña, con sus ya bien conocidos y amplios impactos así como la resistencia socio-ambiental, y el sigiloso pero amplio proceso de expansión de la palma africana que también está topando con problemas de plaga y enfermedades, realidad asociada al monocultivo.

(*) *Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

El IV Censo Agropecuario es contundente, la piña incrementó de 1.422,1% en la extensión sembrada en relación al anterior censo de 1984, siendo el cultivo con mayor expansión en ese periodo de casi 30 años. Seguido por la palma africana con un crecimiento de un 294.6% y el banano con un 60% que casi duplica su área en ese periodo.

Las políticas de subsidios y estímulos por parte del gobierno de Costa Rica a estas tres actividades continúan a pesar de que las ganancias principales están controladas y quedan en manos de unas cuantas compañías transnacionales que han desplazado a los pequeños y medianos agricultores de la producción de los granos básicos. Según el censo las fincas que reportaban arroz se redujeron en un 96%, las de maíz en un 50% y las de frijol en un 43%.

Esta apuesta por el estímulo a los monocultivos expansivos incluye haber eliminado impuestos a los agrovenenos y que Costa Rica ostente el penoso primer lugar mundial como consumidor de agroquímicos (FAO, 2010). Todos sus impactos en la salud pública, y en general en términos sociales, económicos y ambientales recaen sobre la población general. Tal es el caso de la contaminación de agua en Siquirres por la piña, desde el 2007, a un costo de casi un millón de dólares, pagados por usted y por mí en camiones cisterna, pero no por la empresa responsable (Astorga Y, CIDH, 2015).

La repuesta institucional igual que las promesas de campaña de una moratoria al cultivo de la piña no pasaron del papel y buenas intenciones. Sin embargo la misma Naturaleza trastornada por los impactos de este tipo actividades sí está poniendo límites y estos monocultivos han resultado afectados gravemente por diferentes fenómenos, incluyendo los vinculados al cambio

climático, pero las repercusiones primero golpean a los más vulnerables.

El año pasado cayeron las exportaciones de piña por primera vez desde 2009. Mientras, la palma sufrió una baja en precios internacionales y un incremento en enfermedades. En ambos casos las cámaras de empresarios anunciaron que los más afectados son los pequeños productores. Según los piñeros cerca de unas 3 mil y 3.500 hectáreas estaban en manos de alrededor de 500 pequeños productores que tuvieron que dejar la actividad (Prensa Libre, 3-1-16).

El ambiente, trabajadores y comunidades también pagarán los platos de esta crisis. Ya se anuncia que cientos de trabajadores perdieron su seguro y que se dispara la morosidad patronal de la agroindustria.

Los propios ciclos naturales son los que nos debieran recordar que no puede haber una economía sin límites, entre más tecnificado y tóxico sea el paquete tecnológico agroindustrial mayor serán las plagas y la vulnerabilidad climática.

¿Será que los límites que no se logran poner a los monocultivos los está definiendo la naturaleza mediante plagas, enfermedades o cambio climático? ¿La propia insustentabilidad de los monocultivos detendrá su crecimiento y expansión?

La piña de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*

Por Nicolás Boeglin (1)

Editado Por Karina Valverde Salas (2)

El pasado 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña. La actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. La profunda sensación de impunidad y la inoperancia demostrada por el Estado constituyen, entre otros, argumentos de peso de difícil refutación que ahora colocan a Costa Rica en una situación extremadamente delicada, desde el punto de vista internacional.

Se trata de las comunidades de El Cairo, Francia, Luisiana y Milano (cantón de Siquirres), cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas a la producción de la piña. Desde julio del 2007, más de 6 mil personas en estas comunidades rurales toman agua proveniente de camiones cisternas proveídos por Acueductos y Alcantarillados (AyA). Desde el 2007, el Estado no ha ordenado sanciones contra las empresas; tampoco se registra acción penal alguna del Estado contra los responsables de las empresas causantes de dicha contaminación o contra funcionarios que desoyeron las advertencias del mismo AyA. En todos estos años, el Estado

(1) Docente Universidad de Costa Rica.

(2) Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

tampoco proveyó a las comunidades afectadas con un nuevo acueducto de agua potable ni saneado las aguas, pese a dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigiéndole hacerlo “de inmediato” en el año 2009.

Lo que podríamos denominar una “sordera institucionalizada”, pareciera entonces haberse adueñado de varias entidades estatales de Costa Rica desde el 2008, cuando de cuestionamientos relacionados con la piña se trata, so pretexto del desarrollo que aporta. No obstante, las regiones de Costa Rica en las que se produce la piña siguen con los peores índices en cuanto a Desarrollo Humano (IDH) se refiere, poniendo así en entredicho el tan pregonado “desarrollo” que genera dicha actividad.

Es de recordar que debido a la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007, y a numerosos cuestionamientos realizados por activistas, ONG y académicos ante el crecimiento vertiginoso del sector de la piña, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR), su Consejo Universitario, solicitó a las autoridades de Costa Rica frenar su expansión. Con fecha de diciembre del 2008, el Consejo Universitario instaba a las autoridades a establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña. Hoy, aún se sigue a la espera de que se establezca esta moratoria y el pasado 11 de junio, comunidades tuvieron un espacio para que el Ministro de Ambiente se pronunciara de forma definitiva ante este tema. Estaremos al tanto.

*El artículo completo con sus referencias puede ser consultado en: <http://ridh.org/news-and-events/news-articles/la-pina-de-costa-rica-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/>

¿Qué paso con el Aeropuerto Internacional del Sur?

Por José Antonio Mora Calderón (*)

Desde hace más de 5 años se viene hablando de la intención de construir un Aeropuerto Internacional en la región Brunca de Costa Rica, específicamente en el cantón Osa, distrito Palmar Sur, comunidades Finca 9 y Finca 10. En varias noticias ha quedado evidenciado que existe una gran oposición a este proyecto por parte de varios sectores sociales, como son las comunidades campesinas, académicos de la Universidad de Costa Rica, sectores ecologistas, ONG, así como otros movimientos sociales preocupados por las implicaciones que un megaproyecto como este ocasionaría en toda la región sur de este país.

Para el año 2011, un documental titulado *Botas con Machete* mostraba la posición que tienen las más de 100 familias campesinas que viven justo donde se pretende construir este proyecto. Distintas organizaciones como Inogo, Crest, Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur o Fecón también vienen hablando de las implicaciones que traería la construcción de un Aeropuerto

(*)*Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

Internacional en una región conocida por sus atractivos naturales como el sitio Ramsar Humedal Nacional Terraba Sierpe, sus pueblos indígenas (Boruca, Terraba, Curré) y campesinos (las antiguas Fincas Bananeras), así como sus grandes tesoros arqueológicos que son las Esferas de Piedra declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todas estas entidades han manifestado y argumentado sólidamente las consecuencias e impactos sociales y ecológicos que despegarían una vez inicie la construcción de este Aeropuerto.

A pesar de todas las grandes maravillas naturales y culturales que hay en esta región, los conflictos agrarios ocasionados por la concentración de tierras destinadas al monocultivo de banano, palma africana y piña en Buenos Aires, Dominical, Coto 47 y Palmar, las amenazas de proyectos hidroeléctricos en la cuenca alta del río Grande de Terraba, la deforestación dentro del Humedal Terraba Sierpe y las constantes intenciones de construir marinas en el Golfo Dulce, son causantes de una gran cantidad de conflictos sociales y ambientales que preocupan a las distintas comunidades al sentirse vulnerables a desalojos y pérdida de sus tierras, así como por la destrucción ecológica hacia sus territorios.

Con todo esto, el expediente de este proyecto ubicado en la Setena contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de unas 2.800 páginas que el consorcio de las empresas consultoras Acciona-Inforest realizaron. Actualmente, este Estudio se encuentra en custodia, lo cual quiere decir que aún no es posible declararle viabilidad al proyecto. Varios sectores e instituciones han criticado el EsIA del documento por falta de datos, claridad, orden, consulta a comunidades desalojadas, falta de claridad y de análisis, entre otros.

Ahora depende de la presión que los sectores sociales, tanto populares como ecologistas o académicos, realicen a Setena y al Gobierno, pero también depende de la voluntad política del Gobierno y Presidente en turno. Es pertinente recordar que con este proyecto, así como el Proyecto Hidroeléctrico el Diquís, la expansión del monocultivo de palma y las marinas en Golfo Dulce, se está jugando el tipo de desarrollo que se quiere para esta región. Por todo esto vale la pena preguntarse: ¿Serán las comunidades campesinas e indígenas beneficiadas con un la construcción de este proyecto? ¿Qué pasará con el Parque de las Esferas? ¿Hay intenciones de querer conservar y proteger el Humedal Nacional Térraba Sierpe? ¿Qué desarrollo se quiere para la Región Sur-Sur? ¿Quiénes son los interesados en construir este Aeropuerto?

Decidamos: Parque de las Esferas como Patrimonio de la Humanidad o Aeropuerto Internacional

Por José Antonio Mora Calderón (*)

El pasado 29 de abril de 2014 apareció una noticia de que ICOMOS dio el visto bueno para declarar como patrimonio cultural de la humanidad varios sitios arqueológicos del Valle del Diquís. ICOMOS (que sus siglas en inglés significan Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es la máxima autoridad del mundo para emitir criterios técnicos para realizar este tipo de declaratorias de patrimonio; este Consejo ha avalado que los sitios de la península de Osa y Valle del Diquís de Grijalba, El Silencio, Batambal y Finca 6, se conviertan en patrimonio cultural de la humanidad.

Este último sitio, es decir Finca 6, se ubica a 500 metros al este del sitio donde se quiere construir el Aeropuerto Internacional del Sur: las comunidades campesinas de Finca 9 y Finca 10. Esto significa que se está pensando construir un Aeropuerto Internacional muy cerca de un lugar próximo a ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Finca 6 es el conocido Parque de las Esferas, lugar donde están emplazadas de forma original la esferas precolombinas de piedra, un delicado legado de los ancestros de esas tierras que es pertinente proteger.

(*)*Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

Ya en el 2010 la historiadora Patricia Fumero había afirmado que “es contradictorio que la Presidenta se haya pronunciado primero a favor de una declaratoria de interés nacional para el Parque de las Esferas, y ahora se lo dé al aeropuerto”. Pero ¿por qué es contradictorio que el Parque de las Esferas y el Aeropuerto del Sur sean declarados de Interés Nacional? La respuesta de Fumero es clara y sencilla: “el aeropuerto estaría casi encima de las esferas; es la propiedad que está cruzando la calle...”. Esto quiere decir que si se construye el Aeropuerto Internacional del Sur es completamente posible que UNESCO no declare El Parque de las Esferas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tal y como había sucedido con las ruinas mayas en Copán, Honduras.

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de este Aeropuerto (Expediente D1-11752-13), el cual ya se encuentra en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y es de acceso para cualquier ciudadano, este posible Aeropuerto limitaría con grandes e importantes sitios ecológicos y sociales para la región sur-sur: al norte de las fincas se encuentra la Fila Costeña, al noroeste el río Grande de Térraba, al sur el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, al sureste la península de Osa y al este con los territorios indígenas Boruca, Térraba y Rey Curré.

Además de este importante asunto arqueológico que pone en duda si es necesario un aeropuerto internacional en la zona, existen otras anomalías o situaciones cuestionables que este EsIA presenta, por ejemplo su estrategia para “espantar” las aves que habitan el importante sitio RAMSAR, es decir el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, o su argumento de que este humedal ya de por sí se encuentra deteriorado, por lo que el aeropuerto no afectaría mucho, o bien su argumento sobre la palma africana ubicada en medio del humedal y del

sitio donde se realizaría el proyecto, la cual según ellos funciona como una “barrera natural” que impide que los impactos al humedal sean mayores.

Otro argumento cuestionable, y de hecho bastante serio, es la poca (o nula) visibilidad que se le da a las personas que habitan estas tierras, las cuales han sido presentadas prácticamente como “sitios abandonados” ocupados por “precaristas”, cuando todo esto es mentira. Se trata de comunidades campesinas, no poseedoras de su posesión de tierras, pero sí habitantes que por más de 10 años han trabajado y sembrado estas tierras, y que dependen completamente de este lugar para su subsistencia.

En el EsIA tampoco se hace mención de la fertilidad de los suelos, ya que según ellos “el estudio no se debe centrar en eso al no ser un proyecto agrícola”, cuando estas tierras son de vocación agrícola, con suelos de relleno sumamente fértiles, donde las y los campesinos han sembrado arroz, frijoles, plátano, yuca, papaya, pepino, y muchos otros alimentos. Estas personas campesinas se han organizado para defender su territorio, el cual consideran su hogar, su sitio para realizarse como seres humanos, es decir estas tierras son su vida.

Por todo esto, es cuestionable este proyecto del aeropuerto; realmente es importante y urgente cuestionarnos como habitantes de estas tierras, si esta es una verdadera alternativa económica para la península de Osa y el Valle del Diquís, sitios conocidos mundialmente por su enorme y bella biodiversidad, la cual se vería sumamente amenazada con la llegada masiva de turistas y la deforestación para construcción de hoteles, tal y como ocurrió en Guanacaste con la construcción del aeropuerto Daniel Oduber. En otras palabras, sería un grave error la construcción de este proyecto.

¿Otro aeropuerto internacional en Costa Rica?

Por José Antonio Mora Calderón (*)

Actualmente existe la intención de crear un aeropuerto internacional en la Zona Sur de Costa Rica, específicamente en Fincas 9 y Finca 10 de Palmar Sur; ya el Estudio de Impacto Ambiental está en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Aviación Civil, la entidad promotora de este proyecto, menciona de forma muy tangencial los posibles impactos socioambientales que un proyecto de tal envergadura provocaría en toda la región sur-sur; solamente menciona los principales beneficios como empleo para la construcción de la obra, atracción de turistas, mejoramiento de la calidad de vida en la Zona Sur.

Sin embargo, la región sur-sur de Costa Rica, especialmente la península de Osa (que es donde se situaría este proyecto) es una de las regiones con mayor biodiversidad en el nivel mundial; esto significa que es un lugar con una alta fragilidad ambiental, y la alteración de alguno de los componentes de este delicado ecosistema afectaría enormemente toda su dinámica.

Además de los impactos ambientales que ocasionaría este megaproyecto, es necesario situar de primero los impactos sociales que generaría, partiendo que en la

(*)Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

región sur-sur existen gran cantidad de asentamientos campesinos y territorios indígenas, ambos con prácticas de trabajo de la tierra, agricultura local, y una fuerte identidad cultural alrededor del agro, es decir son territorialidades agrarias, que en el caso de las indígenas, adquieren un valor ancestral y espiritual.

En cuanto a los impactos ambientales, este posible aeropuerto se ubicaría a menos de 500 metros al norte del Humedal Térraba-Sierpe, un humedal Ramsar de importancia mundial, pues alberga una gran cantidad de flora y fauna y, a pesar de que Aviación Civil menciona que es un humedal ya deteriorado por el cultivo de arroz, no significa que su dinámica no sea determinante para todo el desarrollo local que se da alrededor de este importante sitio.

El Aeropuerto se ubicaría a menos de un kilómetro de Finca 6 o El Parque de las Esferas, sitio arqueológico donde se encuentran las esferas de piedra del valle del Diquís y que se encuentra pendiente su aprobación como patrimonio mundial de la humanidad. El aeropuerto se situaría sobre el acuífero Puerto Cortés, un manto acuífero que es un yacimiento subterráneo de agua dulce, que ofrece a las comunidades una alternativa de consumo; es posible que con la llegada de la UFCo este acuífero haya sido impactado; sin embargo, su existencia es inminente y es preciso considerar su conservación para consumo de las comunidades.

Surgen preguntas como: ¿Es necesario un aeropuerto internacional en la zona sur? ¿Qué pasará con las familias campesinas que han habitado estas tierras por más de 14 años? ¿Qué beneficios reales traería la construcción de este proyecto en esta zona? ¿Es un aeropuerto una salida económica para la región sur-sur? ¿No es posible encontrar otras alternativas que respeten la cosmogonía

de los pueblos y sus prácticas tradicionales y fomentar el trabajo del campesinado por medio del fortalecimiento en los mercados locales, el intercambio de semilla criolla o la capacitación en prácticas agroecológicas?

Como dijimos, ahora el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto se encuentra en la Setena, dependiendo de la calidad de los análisis y de la voluntad política, este proyecto será o no una realidad, y ya tenemos el ejemplo de Guanacaste cuando se construyó el Aeropuerto Daniel Oduber. Les invito a que se informen, que averigüen sobre esto y que se posicionen frente al tema. Actualmente la Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur tiene más de tres años de estar en resistencia frente a este proyecto; por ello, es necesario que finalmente se busquen acciones de resistencia frente a este proyecto y apoyar a las comunidades campesinas y pesqueras que disputan frente a este.

La tierra para quien la trabaja, o ¿un aeropuerto en la Zona Sur?

Por José Antonio Mora Calderón (*)

El pasado 12 de julio, niñas y niños de edades desde los 2 hasta los 16 años de las comunidades Finca 9 y Finca 10 de Palmar Sur, inauguraron un mural en la escuela de Finca 9. Este fue realizado en conjunto con cuatro estudiantes del curso de Psicología Comunitaria de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. En el mural aparecen las lapas, cocodrilos, esferas de piedra, un manigordo, pollos, la escuela, la plaza, árboles, así como manos pintadas por ellas y ellos, que firmaron de forma original esta pieza de arte. Es precisamente al frente de esa escuela donde se pretende construir el Aeropuerto Internacional de la Región Brunca, el cual su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se encuentra en la Setena con el expediente D1-11752-13.

Finca 9 o Finca 10 suena a un espacio vacío, ya que en nuestro imaginario la palabra “finca” no es asociada a una comunidad, pero en realidad este es el nombre que la United Fruit Company (UFCo) dejó a las tierras usadas para la producción de banano, y que luego se convirtieron en comunidades. En Fincas 9 y 10, donde quieren construir el Aeropuerto, viven más de 100 familias que se dedican al trabajo agrícola para la venta y el autoconsumo, es decir aquí viven familias campesinas.

Una vez que la UFCo abandona la región, después de la huelga del 84 por parte de sus empleados, Finca 9

(*)Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

queda en manos del Instituto de Fomento Cooperativo (InFoCoop) y Finca 10 del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Estas familias no han sido capaces de adquirir titulación de las tierras. En pocas palabras: familias campesinas, exempleadas de la Compañía Bananera, que trabajan en tierras fértiles y productivas, donde usted puede encontrar escuelas, pulperías, fincas cultivadas por esta gente, así como hallar restos arqueológicos al estar tan cerca del Parque de las Esferas de Finca 6 y animales silvestres como cocodrilos o lapas por estar a menos de 500 metros del Humedal Térraba Sierpe, serían desalojadas para iniciar la construcción de este megaproyecto, que promete progreso y desarrollo para la Zona Sur de este país.

La situación actual es confusa. Representantes del Gobierno prometieron este proyecto hace poco en la zona, incluso afirmaron que todo está listo para iniciar la obra, sin embargo usted puede consultar el expediente de EIA en Setena y se dará cuenta que este proyecto se encuentra en custodia, debido a la falta de trámites que Aviación Civil no ha logrado cumplir, como elaborar correctamente el Estudio Socioeconómico de los impactos del proyecto, así como la gestión para llevar a cabo la Audiencia Pública, que apersonados del expediente han solicitado. En definitiva esta megainfraestructura traería a toda la región Sur-Sur, una transformación a su modelo productivo. ¿Ecoturismo o megaturismo? Aún no se sabe.

En medio de esta gran incertidumbre, las familias de Finca 9 Finca 10 están organizando un Festival Campesino para el próximo 21 y 22 de agosto, con el fin de ser visibilizadas y dar a conocer su posición con respecto a este conflicto, que ya tiene más de 5 años de amenazar a quienes sobreviven de la tierra que siembran y trabajan.

La gente de Finca 9 y 10 espera respuestas mientras se decide sobre el Aeropuerto del Sur

Por José Antonio Mora Calderón (*)

El pasado 7 de mayo del 2016 , el señor Wagner Jiménez, administrador educativo comentaba en la sección Opinión del diario Extra la importancia de construir pronto el Aeropuerto Internacional de la Región Brunca (AIRB) que estaría ubicado en Finca 9 y Finca 10 de Palmar Sur, Osa. Su principal argumento es que este proyecto llevaría trabajo y riqueza a la región, caracterizada por presentar de los mayores índices de pobreza en Costa Rica. Es exactamente el mismo argumento el que utiliza Luis Carlos Araya, exviceministro de Transporte Aéreo y Marítimo y hermano mayor del actual alcalde de San José, Jhonny Araya; este hace alusión en un artículo de Opinión del 16 de mayo del mismo periódico a la importancia de darle seguimiento a este proyecto que ya de por sí posee decreto de interés nacional. En general se vuelve a sacar a luz pública el proyecto del Aeropuerto del Sur a propósito de la reelección del alcalde de Osa, Alberto Cole, quien ha sido de los principales defensores de este proyecto.

(*)*Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

No es necesario mencionar nuevamente que este Aeropuerto sería vecino del Parque de las Esferas, Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, o del Humedal Térraba Sierpe, sitio de importancia Ramsar. Tampoco es necesario volver a indicar si este proyecto sería una verdadera solución para la región Brunca, ya que este tema se ha tocado varias veces anteriormente. La principal pregunta que se quiere recalcar sobre este proyecto es: ¿Qué acciones ha pensado el Gobierno para tratar la situación de las personas que serían desalojadas de Finca 9 y Finca 10 para construir este megaproyecto? ¿Serían reubicadas? ¿Qué se piensa hacer mientras se llega a una solución? Es importante recordar que en estas dos comunidades viven más de 100 familias, que incluso han realizado festivales, documentales, libros y programas de televisión para denunciar su situación de tenencia de la tierra.

Las familias que viven en las Fincas de Palmar Sur, sobre todo las que habitan dentro de sus parcelas, poseen un enorme problema en cuanto al acceso de agua potable y electricidad. A parte de su situación legal de la tierra, donde nadie posee títulos de propiedad, estas familias viven en condiciones de abandono por parte de las instituciones estatales encargadas de brindar los servicios básicos para cualquier ciudadano. Se trata de derechos fundamentales que estas familias poseen y que se les ha negado, naturalizando su situación de pobreza. Esto quiere decir que Osa realmente posee un índice de pobreza muy alto, pero ¿por qué el Estado no invierte en obras públicas en comunidades vulnerables como estas a sabiendas que la seguridad social es atravesada por todos estos factores? Alegremente el acceso a la educación no es un problema en la región; sin embargo, la situación de tenencia de la tierra, servicios básicos de

electricidad, agua potable y la salud son situaciones que nos hacen pensar en si es casual este abandono en una zona donde aún no se ha definido si se llegará o no a realizar el Aeropuerto del Sur.

Las personas vecinas de Finca 9 y Finca 10 mencionan que desde la declaración de interés nacional del Aeropuerto, no saben qué va a pasar con ellas y ellos. No existe claridad sobre este asunto, pero lo más importante es que mientras se resuelve el tema se debería considerar las necesidades vitales de estas familias que poseen decenas de años de habitar estas tierras. En términos generales el Estado, y en este caso el Inder, Infocoop y la Municipalidad de Osa, no han manejado de la mejor forma la situación y el conflicto agrario que desencadena la promoción de una megaobra como lo que se viene pensando desde hace más de ocho años.

Vivencias campesinas por la tierra: Relato de un campesino en la frontera Caribe

Por José Julián Llaguno Thomas
y Verónica Martínez Sánchez (*)

Wilberth Gómez, vecino de Paraíso de Sixaola, nos cuenta el proceso que ha tenido que llevar para poder tener la titulación de la tierra donde ha vivido, sembrado, luchado y crecido desde 1981, año en que llega a la comunidad con su familia, producto de una toma de tierras en fincas que habían sido abandonadas por la bananera Chiriquí Land (antigua United Fruit Company). Durante todo este tiempo, que ya son más de 30 años, ha vivido con incertidumbre sobre su tierra, ya que hasta hace muy poco existe claridad institucional sobre la posesión legal de su parcela.

Nos menciona que la década de los 80 fue muy dura, especialmente por todas las presiones y el poco apoyo que tenían del Estado por ser “precaristas”. Como no eran dueños de las tierras, tenían que pasar por un periodo de diez años para lograr el derecho de posesión. A costa de un gran esfuerzo, su familia logró “sobrevivir” ese periodo de tiempo a partir de la producción de granos básicos, tales como arroz, frijoles y maíz, en medio de un espacio rodeado de grandes plantaciones de banano para la exportación. Luego de cumplir este proceso, a

(*)*Docente y asistente del Programa Kioscos Socioambientales.*

inicios de la década de 1990, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) empezó a titular la mayoría de las parcelas de los asentamientos creados en Sixaola, aunque nunca se logró entregar la totalidad de estos.

En noviembre del 2010, la situación se complica cuando el presidente ejecutivo del IDA les notifica a las personas de estos asentamientos que los títulos de propiedad no tenían validez, ya que la institución estaba obligada a cumplir los mandatos de la Contraloría General de la República sobre la franja fronteriza. En esta legislación, la tierra que se encuentra alrededor de los 2 km de la frontera se considera inalienable; es decir, no se puede titular por razones de seguridad, así como por riesgo ambiental. No obstante, cerca 20 asentamientos campesinos fueron creados y titulados en este espacio antes de esta ley. Ante esta disyuntiva, la comunidad se organizó y creó el Frente de Lucha en Defensa del Territorio, por medio del cual se articuló con distintos actores y organizaciones aliadas con las cuales llevaron a cabo este proceso. Con esto se generó un complejo conflicto, que se extiende hasta la actualidad, en donde se desarrollaron interpretaciones jurídicas y acciones institucionales diferenciadas sobre el caso de los asentamientos campesinos dentro la franja fronteriza.

Es en el mes de mayo del 2016 que la Contraloría se pronuncia nuevamente sobre el tema y permite que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) desarrolle los estudios necesarios para aprobar concesiones de tierra por periodos indefinidos en la franja fronteriza. En este contexto de cambio e incertidumbre, las familias campesinas que viven en la zona han tenido que desarrollar múltiples estrategias para continuar cultivando la tierra. En palabras de Wilberth, tener la titulación de la tierra significa para las comunidades fronterizas del Caribe:

“-Seguridad jurídica- esto nos permite a nosotros tener tranquilidad de que nadie nos va a venir a despojar a nosotros del espacio de tierra que tanto nos ha costado. Y si tenemos esto, significa que tenemos seguridad sobre la tierra y, por ende, seguridad alimentaria que, finalmente, es lo que hemos buscado. Tener un pedazo de tierra como campesinos, poder sembrar y saber que aunque pueda venir una crisis muy grande, nosotros tenemos tierra donde sembrar nuestros alimentos y los de muchas personas más. Para nosotros significa mucho tener ese título de propiedad; algunos dicen que los campesinos quieren tener títulos de propiedad para vender la tierra, pero eso no es cierto porque si hubiéramos querido vender les hubiéramos vendido a las mismas empresas que en el año 1991 traían todo un programa para comprar otra vez estas tierras y volverlas a sembrar de banano. Más bien nosotros nos opusimos a que las compañías adquieran otra vez estas tierras. Entonces sí, es muy significativo para nosotros la titulación, ya que fue y sigue siendo un proceso social y político de lucha”.

A pesar del tenso panorama que se ha vivido con la institucionalidad agraria del país, en donde hay un apoyo creciente a la agroindustria de exportación y al fomento de actividades de servicios en las comunidades rurales, existen pequeñas semillas de resistencia, como es el caso de Wilberth y las distintas familias de Sixaola que no abandonan su vida y práctica campesina. En este caso, la lucha por el acceso y mantenimiento de la tierra es más que un papel en el registro de propiedad, ya que se convierte en una de las ventanas para reconstruir la memoria colectiva de lucha, organización y defensa del territorio campesino.

Florecer entre los restos de mil naufragios.

Tomas de tierra en la United Fruit de Palmar Sur, Costa Rica

Por Ramón Vera Herrera (*)

Palmar Sur, Costa Rica, junio, 2016. Estamos casi en el cuello de la península de Osa, aledaña a la frontera con Panamá. Hay reunión de colonos en uno de los galpones de fertilizante, hoy vacío, de lo que fue la United Fruit Company. Las historias de trashumancia se agolpan como los truenos distantes.

En las plataformas de descarga siguen los restos herrumbrados de la maquinaria de poleas que de todos los predios jalaba las enormes pencas. El banano se movía, suspendido en cables de acero, por zanjas circundantes a lotes de quinientos metros por cien, dividiendo en predios “naturales” el espacio de los platanares.

A la vuelta de 55 años y tras el colapso de la bananera y la ulterior quiebra de las pseudo-cooperativas de cacao, palma africana y banano que le sucedieron, innumerables poblaciones procedentes de Costa Rica, Panamá, Nicaragua y hasta Honduras, se aposentaron en esos lotes con la anuencia tácita del Instituto de Tierras y Colonización (Itco), conocido ahora como Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Hoy esas zanjas por donde circulaba el banano son los linderos reconocidos entre

(*) Editor de la Revista *Biodiversidad* y del suplemento *Ojarasca*.

los predios. Y a los lotes en conjunto se les llama “los cables”. La gente dice tener “su cable” —que unos siembran con banano, otros con milpa, con yuca, con cacao o los varios frutales que completan la dieta. Según dicen el frijol y el arroz “poco se dan” y en parte es la prolongada devastación de las tierras desgastadas por años con agroquímicos, y en parte es el mecate plástico que fue metiéndose (en el descuido) al subsuelo de muchos “cables”, por el manejo de los costales de insumos y los plásticos que cubren las pencas para evitarles los parásitos. “Esos metros y metros de mecate enterrados, y tanto agroquímico en el suelo, hoy impiden que las tierras rindan todo lo que podrían”, comenta “don Pichincho”, Fernando Artavia, uno de los colonos.

Tras el calor se levanta de los platanares el vapor y de inmediato se vuelve lluvia pertinaz, de gotas grandes y fresca muy volátil.

Estamos en el espacio de Finca 10 y Finca 9, unas 502 hectáreas divididas en “cables” que tomaron más de 85 parceleros. “Aquí había ya puras malezas y guarumos. Y nosotros comenzamos a sembrarlas. Nuestros productos los enviamos a San José”, continúa don Pichincho.

El 24 de mayo de 2014, las fincas de los “cables” aledaños a Changuená y Térraba protagonizaron la defensa de su territorio junto con las comunidades téribes, mediante un plantón que resistió los desalojos por parte de las fuerzas antimotines durante 18 días contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHD) que busca vender electricidad a nivel internacional y contra la implantación de una ley de rías para zonas marítimo-terrestres que va por enclaves turísticos y de servicios para inmensas villas de pensionados estadounidenses que ya aprobaron los desarrolladores.

“La sabiduría de la política nos dice que ser campesinos es una arma muy eficaz contra el gobierno”, afirma Sonia, una de las parceleras. Y prosigue: “Las autoridades municipales siguen insistiendo en que desocupemos porque nos requieren la titulación de las tierras que estaban desocupadas y que nosotros sí trabajamos. Yo tengo hijos y por más de 30 años he luchado por ellos en estas tierras, pero el gobierno de la municipalidad quiere construir dos marinas y un aeropuerto. Al alcalde que se opuso junto con nosotros, lo apuñalaron por la espalda”.

El PHD y el desarrollo inmobiliario en ciernes vienen a consolidar los poderíos locales ávidos de lavar dinero y justificar la expansión de comercios, servicios básicos, acaparamiento del agua, cuotas de energía procedentes de las centrales eléctricas, tendido carretero, y la cauda de corrupción que esto entraña.

Es paradójica la fuerza de la población porque ésta es muy disímil, las familia provienen de historias inciertas de ostracismo y abandono, verdaderos restos de mil naufragios que se fueron rejunando de a poquitos, tomando una casa aquí, un cable allá, hasta volverse una comunidad de los diversos. “No quieren reconocernos los años que hemos estado aquí y alegan problemas en la tendencia de la tierra”. Hace dos años las autoridades quisieron dividir a la gente de Finca 10 y Finca 9 y echarnos a pelear. También decían que los manifestantes habíamos bloqueado el puente “cuando bien saben que fueron los antimotines los que se aposentaron ahí, para echarnos la culpa del problema”.

Las poblaciones ahí asentadas tienen una historia común: haber sido traicionados por el gobierno. Éste los dejó invadir en el fracaso de las cooperativas de palma y banano que sustituyeron a la enorme plantación cuando ésta cerró sus puertas en 1984. Esto resultó de una huelga

que pudo estar influida por el sandinismo imperante en Nicaragua. Pero lo cierto es que tras declararse en quiebra, la United se reconstituyó como United Brands, dueña de la marca Chiquita, de vínculos paramilitares.

Tras años de habitar “los cables”, la gente se topó con que el gobierno no les “transparentaba” la tenencia de la tierra. Y los vecinos los siguen considerando invasores sin más, cuando que son quienes han cuidado, mal que bien, con lo poco que detentan, esos montes, esos matorrales de caña brava y hasta los enormes predios de palma aceitera que hoy las compañías pretenden echar a andar de nuevo.

Con el pretexto de que no tienen titulación no hay presencia de las instituciones. Ni agua por las tuberías les llega. Es puro herrumbre trasminado lo que sacan de los caños. También se oxidan los puentes y la herramienta.

No los dejan arrimarse a las juntas de desarrollo. Y a la hora de la verdad son los más visibles para defender la región contra el futuro que se les viene encima.

Aventados a esas tierras están. Y por eso la defienden con la vida. A Carmen Quintero, le quemaron su rancho hace un mes en Changuená, como una secuela de los plantones, porque así como hay quien defiende, hay los que no se conforman con que la gente habite casas u oficinas de la época en que funcionó la bananera.

“El gobierno se come nuestros derechos”, nos cuenta. “No nos vamos a dejar de los incendiarios. De las cenizas renace el fénix. Y aunque la pobreza está a la vista y hay drogadicción y muchos delitos que perseguir, ésta es nuestra casa. Hasta aquí llegamos huyendo. Sí es cierto que somos como los restos de un naufragio. Hemos de todo: panameños, hondureños, nicaragüenses. Muchos de los aventados somos afrodescendientes chiricanos.

Mi papá fue cocinero de un bongo en la guerra de Costa Rica con Panamá”.

Bolívar Vázquez lleva en Finca 9 treinta años. Procedía de Alajuela y su trabajo se iba en “desmanar las pencas y forrarlas con hojas grandes del mismo banano, para luego estibarlas en los furgones del ferrocarril. Trabajó ahí en esas mismas tierras desde los 12 años, “sube y baja escaleras para estibar cajas”. Su abuela fue una mujer boruca que se juntó con un gringo. Al pelear con su marido su mamá se fue a Orotina, “siempre como campesina”. Ahora en su finca él siembra lo que quiere. Y dice afable pero firme: “Ésta es mi vida: siembro elote, tengo mis limones”.

Fernando Artavia vino del Cerro de Chompite, por el lado de Orotina. Sabe que se llevaron a su papá, Hernán Artavia, reclutado para la guerra. “A él y a Rafael Molina se los llevaron al Cerro de la Muerte a guerrear. Casi desnudos se los llevaron”. Murió su hermano picado de víbora de cascabel cuando él tenía 8 años. Y al poco tiempo murió su papá “quién sabe de qué”. “Luego murió mi mamá y me quedé rodando. Cuando tenía 21 años entré a Pinedeco (Pineapple Development Corporation), subsidiaria de Del Monte, empresa que acaparó el cultivo de la piña en Costa Rica, en Buenos Aires de Punta Arenas, y que siempre mantuvo un trato atrabiliario hacia los trabajadores. “Cuando salí dañado de los ojos, me retiraron al igual que a otros 180 peones despedidos al mismo tiempo”.

A estas poblaciones su vida les urgió a la trashumanza antes de llegar a habitar los restos de las fincas en los “cables”. A quienes intentaron vivir por su cuenta huyendo de las plantaciones los rastrearon con perros para regresarlos. A otros y otras les abandonaron los padres, la pareja, o les hicieron problemas laborales, pro-

blemas con la injusticia y las autoridades, o sufrieron la incrustada violencia doméstica. Terminaron yendo y viniendo en un espacio de fragilidad extrema y pocas ataduras comunitarias. Como desde siempre, a las poblaciones indígenas más tradicionales las fragmentaron para dar entrada a empresas, autopistas, bienes raíces y la delincuencia organizada que se va apoderando de todo.

Cuenta Ana Luisa Cerdas, una de las investigadoras clásicas de la zona, que a fines del siglo XIX se fundó con el nombre de Dios Primero una colonia penal en la finca de un cura, Nievorwsky, encargado de evangelizar Térraba y Boruca. “Su población estaba compuesta por confinados costarricenses y sus familias; por chiricanos, y por una serie de inmigrantes que fueron llegando al lugar en las primeras décadas del siglo”.

No deja de ser sintomático que para 1927 las poblaciones boruca y téribe (ellas mismas obligadas a migrar de Panamá donde se autonombraban brorán) de Conte, Boruca, Térraba y Palmar eran consideradas “una numerosa colonia bastante trabajadora y de mejor cultura (casi todos leen y escriben) que las otras poblaciones que tuvo la oportunidad de conocer”. Y que en ‘apego a sus costumbres ancestrales’ cultivaban frijoles, maíz y plátanos para su consumo” además de cazar y pescar, “manteniéndose aparte del desarrollo que se gestaba en la región, siendo desatendidos por las autoridades nacionales”. En Costa Rica eran ajenos: “indios, extranjeros y ciudadanos del país”, se decía. Esto propició el despojo de tierras perpetrado por los agentes de la United Fruit Company (UFCo) que se apropiaron de la desembocadura del Río Grande de Térraba y la llanura regada por éste. Los testaferros sirvieron los propósitos de casi todos los despojos amañados, pero en otros casos, a la población de los Palmares los desalojaron en directo de sus tierras de cultivo y de sus caseríos.

“Ahora estamos comenzando a sembrar de nuevo”, se lee en El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur, de Ana Luisa Cerdas. “Teníamos nuestras milpas hechas en terrenos donde hemos trabajado toda la vida, cuando llegó la Compañía y en unión del Agente de Policía nos quitaron esas tierras. Hemos tenido que irnos ahora a aquellas filas (y señalaban las montañas lejanas). Trabajamos con dificultades, porque se nos tiene prohibido botar ni un árbol. Luego he sabido que en las tierras ocupadas antiguamente por la población indígena, y por ella trabajada, se ha afincado el Agente de Policía y un socio. Siembran banano, que les compra la Compañía en mejores condiciones que a ningún productor”.

Las maneras de operación de la bananera fueron siempre oscuras. Sólo “hacían referencia a la cantidad de hectáreas sembradas” pero la United expandió perpetuamente la superficie que acaparaba para mantener una gran zona de amortiguamiento, imposibilitando que otras compañías u otros productores en pequeño pudieran dedicarse al cultivo del plátano. Según el estudio “Ocupación del Pacífico Sur”, de Antoni Royo, la cantidad cultivada fue cercana a las 7 mil hectáreas en el Pacífico (en 18 fincas de entre 333 y 500 hectáreas cada una). No obstante, en un momento de auge (en 1938) la compañía llegó a acaparar “118 mil hectáreas en la costa del Pacífico”.

En 1956, el volumen de tierras pertenecientes a la Compañía en todo el país, “era de 203 mil 526 hectáreas, manteniendo bajo cultivo el 13%, es decir 27 mil 087 hectáreas”, según notas de Royo. Cerdas añade que casi una cuarta parte de sus terrenos totales los utilizaba en cultivos, pastos, drenajes, caminos y edificios.

La United controló y monopolizó la tierra apta, su producción, la exportación y comercialización y todas sus infraestructuras. Adquirió grandes extensiones para construir y controlar vías y transportes (sobre todo vías férreas y puertos). Nacieron así las “economías de enclave”, provocando la llegada de inmensas migraciones. Detentaban tanta tierra que nunca pensaron rehabilitarla, simplemente la abandonaban e iban por el siguiente predio.

La UFCo ejerció un importante control sobre su mano de obra. No eran “temporaleros” sino peones de planta en viviendas de largo plazo. A esta población se le construyeron caseríos de diseño uniforme con una plaza rectangular rodeadas de las casas del capataz y su gente, y las bodegas para instrumentos de trabajo e insumos.

La gente que hoy habita “los cables” insiste en darle significación a su historia y al papel que deben jugar en ella. Para todas estas personas “vivir es dar cuenta de la vivencia, pero además, dejar de ser anónimos”, lo que implica “significar la unión de todas nuestras historias en lo que ahora vivimos pero sobre todo ser reconocidos como los poseedores de esas tierras”.



Cambio climático, bosques y pueblos

Soluciones de los pueblos al cambio climático

Por Andrés Cambronero Rodríguez
y Zuirí Méndez Benavides (*)

*“No son ellos: ni los gobiernos ni las empresas,
las que decidirán sobre nuestro futuro;
Somos nosotros, somos todos”.*

Manifiesto “Inadaptados al cambio climático”,
Caravana Climática, 2014.

El cambio climático es un tema que en la actualidad y aprovechando el cataclismo, se convierte en “minita de oro” para nuevos negocios. El cambio climático fácilmente se relaciona con altas temperaturas, huracanes y sus soluciones, se asocian con las “3 R” (reduzca, reutilice y recicle), o la Carbono Neutralidad, que representan “buenos negocios”. Costa Rica no se quedó atrás y más bien propuso e inició la negociación del programa de Reducción de Emisiones debido a la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), con el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas.

REDD+ busca disminuir el dióxido de carbono (CO₂) en el planeta, el cual es uno de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que producen el cambio climático, donde corporaciones pueden pagar por el CO₂ de los

(*)Asistente y docente del Programa Kioscos Socioambientales.

bosques, comprando bonos de carbono, para garantizar que los bosques no sean intervenidos y asegurar que los GEI que producen serán absorbidos y compensados. Es decir, quienes contaminan pagan, pero consiguen el permiso para seguir contaminando. Si algo no les queda claro o creen que es paradójico, tranquilidad, así es.

La implementación de REDD+ tanto en Costa Rica como en otros países, es cuestionada tanto por su lógica como por su impacto, porque permite que una minera pague un permiso por contaminar, conservando bosques, mientras diariamente destruye para siempre ecosistemas y comunidades enteras.

Además, las comunidades indígenas son unas de las más perjudicadas con REDD+, porque viven y conviven con los bosques (captadores de carbono) que entrarían bajo reglamentos para la conservación. En Costa Rica las comunidades bribris consideran que la mercantilización de la naturaleza no es el camino, pues señalan que “no tenemos necesidad de vender la montaña, ni recibir nada a cambio”, y consideran una falta muy grave al Convenio 169, que no exista una consulta indígena en los 6 años que lleva el proceso REDD+.

Mientras las empresas continúan contaminando y más bien encuentran un negocio en las falsas soluciones al cambio climático, como en REDD+, bonos de carbono, 3R o 6R, Carbono Verde y Carbono Azul, etc., las comunidades en todas partes del mundo se encuentran luchando contra megaconstrucciones de minas, petroleras, gaseoductos, hoteles, urbanizadoras, autopistas, aeropuertos, puertos, etc. y deteniendo con sus prácticas y sus cuerpos la avanzada destructora de extracción, producción y distribución que producen los GEI y provocan el Cambio Climático.

En apoyo a estas luchas, el programa Kioscos Socioambientales junto con COECO Ceiba estamos promoviendo espacios informativos en mayo, sobre justicia climática. Los detalles de estos pueden ser encontrados en la página de facebook “No REDD+ Costa Rica”, en el programa “¿Existe justicia climática en Costa Rica?” de Era Verde, el video “Miradas Críticas sobre REDD+” en youtube, y el 20 de mayo a las 5 p.m. el foro “Costa Rica y la Máscara Verde”, en el auditorio de la Facultad de Educación de la UCR.

Indígenas denuncian irregularidades de representatividad en proceso de preparación a REDD+

Por Marita Arce Soto (*)

Indígenas bribris del Caribe manifiestan molestia al aplicarse en sus territorios un proceso de preconsulta y consulta, creado por doce líderes indígenas que han participado como representantes en el proceso de preparación de REDD+, sin la autorización y el conocimiento por parte de las comunidades.

Desde el 2008, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y MINAE, encargados de preparar el proyecto REDD+ en Costa Rica, realizaron acciones de coordinación con las ADIIS (Asociaciones de Desarrollo Integral) de los territorios Bribri y Cabécar, y decidieron incorporar a doce indígenas quienes asistieron a varias reuniones iniciales.

En dichas reuniones, los líderes manifestaron no estar autorizados por sus asambleas comunitarias a integrarse plenamente en REDD+, y que para hacerlo deseaban consultar a las “bases” (R-PP FONAFIFO, p 8).

(*)Asistente del Programa Kioscos Socioambientales.

Ante esta propuesta, FONAFIFO, afirmando que el Gobierno tenía la voluntad de aplicar el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado, se comprometió a coordinar reuniones, con el apoyo de las ADII y estructuras indígenas tradicionales, para elegir a los representantes indígenas en los comités de vecinos de los territorios, que integran tanto a afiliados de las ADII como no afiliados (R-PP FONAFIFO, p. 22).

Sin embargo, estas intenciones de consulta para la elección de representantes no sucedieron como se afirma en los documentos oficiales. El sector indígena que ha manifestado mayor criticidad al respecto, sostiene que esas doce personas continuaron en el proceso sin autorización de las comunidades, y que trabajaron en la preparación de un plan de consulta que hasta ahora es desconocido por la población, y que por tanto consideran ilegítimo.

Estos hechos motivaron a Filidencio Cubillo, indígena bribri, a interponer un recurso de amparo (Exp: 13-010897-0007-CO) en contra de FONAFIFO y MINAET, por pretender desarrollar proyectos en los territorios de Talamanca sin realizar procesos de consulta. En el recurso se apela a que las doce personas indígenas, quienes han formado parte de la preparación del plan, fueron seleccionados sin consulta previa a todos los miembros de la comunidad.

No obstante, el recurso fue rechazado con base en las declaraciones de René Castro Salazar y Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, Ministro de Ambiente y Energía y Director Ejecutivo del FONAFIFO, respectivamente, quienes manifestaron no tener responsabilidad alguna, ya que “FONAFIFO no ha seleccionado a nadie, pues fueron los mismos indígenas quienes escogieron la forma de participación”.

Parece entonces que el problema de representatividad queda reducido a un conflicto de organización interna de los territorios, mientras el proceso de preconsulta y consulta continúa, con la validación de FONAFIFO, en la mayoría de los territorios del país. En medio de un ambiente local conflictivo y donde, además, afloran los cuestionamientos sobre las implicaciones de REDD+, las distintas voces indígenas de nuevo son relegadas ante una lógica de imposición.

La montaña no es un recurso de mercantilización

Zuiri Méndez Benavides (*)

Las comunidades bribbris se encontraron el viernes 29 de agosto en Suretka, para conversar con el gabinete del Minae sobre sus preocupaciones del proceso REDD+ que se lleva en territorios indígenas. REDD+ es un proyecto del Banco Mundial y la ONU, que se plantea como una de las tantas estrategias para disminuir el cambio climático. Permite a las corporaciones pagar permisos de licencias por la contaminación producida de carbono que liberan a la atmósfera, evitando en teoría las emisiones por deforestación y degradación de los bosques.

REDD+ es una nueva generación de pagos por permisos de contaminar, que deviene luego del Pago por Servicio Ambiental (PSA) y se diferencia en su gran mayoría por la forma de financiamiento. El PSA se financia del impuesto al combustible y acuerdos de donaciones con empresas nacionales, REDD+ todavía no tiene claro su mecanismo de financiamiento, pero parece que obtendría sus fondos de corporaciones internacionales en un mercado de bonos de carbono.

Asistieron aproximadamente 300 personas provenientes de más de 12 comunidades del territorio bribri. De parte del Minae participaron el ministro Édgar Gutiérrez, la viceministra de Ambiente Patricia Madrigal, el presidente de Fonafifo, Jorge Mario Rodríguez, la directora de la estrategia REDD+, Alexandra Sáenz y Fernando Mora, viceministro de Aguas.

Las comunidades dijeron “Basta ya de engaños”, cuestionaron el “desarrollo” que traen los múltiples proyectos para el territorio, señalaron al gabinete que como gobierno, tienen el poder de decisión de detener la estrategia REDD+, que deben respetar los derechos de los pueblos indígenas con su cosmovisión y explicaron que para el pueblo bribri es diferente el respeto a los bosques, que la conservación de los bosques, por lo que están en contra de su mercantilización.

También reclamaron la ausencia de explicaciones del tema por parte de personas del gobierno en más de 6 años de preparación de la estrategia REDD+, cuestionaron el procedimiento de dicha estrategia, la representación indígena en las negociaciones del proyecto y solicitaron al ministro que se detenga la estrategia de REDD+ en su territorio.

El gabinete del Minae se comprometió a regresar al territorio para realizar un debate público sobre REDD+, donde la Aditibri sea la mediadora. Patricia Madrigal manifestó estar en contra de “proyectos que le pongan precio a lo que tiene valor (cosmovisión)” así como su interés de escuchar la posición de las comunidades.

Jorge Mario Rodríguez, se comprometió a regresar a explicar de su parte qué es REDD y afirmó conocer que el PSA trajo muchos beneficios a las comunidades desde 1997, mientras que las comunidades dijeron nunca

conocer un puente, camino o acueducto hecho con esos fondos gestionados por antiguas ADI's.

El ministro Édgar Gutiérrez, dijo estar más interesado en un proceso de construcción de acciones de desarrollo, que “no está ni a favor ni en contra de REDD+” y señaló que este tipo de proyectos son formas en que los países industrializados se “lavan la cara” por la contaminación que producen, y que podría ser una oportunidad que los pueblos pueden tomar o no.

Entre los compromisos del gobierno de regresar al territorio en el marco de respeto a los pueblos indígenas y con intenciones de generar propuestas de desarrollo que las comunidades planteen, las comunidades les recordaron que van a esperar la siguiente actividad, que conocen sus derechos también presentes en el Convenio 169 de la OIT y que esperan que el gobierno detenga este proyecto como una acción concreta “para creer en el cambio”.

El Programa Kioscos Socioambientales seguirá dando seguimientos a estos espacios que como puentes, permitan a las comunidades expresar y comunicar sus formas de proteger sus territorios.

¿Cuál es el precio por conservar REDD+?

Zuri Méndez B.

No se extrañe si usted no conoce este proyecto, la mayoría de la población indígena, y del país en general, nos encontramos en la misma situación.

REDD+ es un programa promovido por el Banco Mundial y la ONU para compensar el Cambio Climático, conservando bosques para que absorban el exceso de carbono de la atmósfera. Sus siglas significan Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, más aumento de conservación, manejo sostenido y reservorios de carbono del bosque. Desde el 2008 se desarrolla para la implementación de REDD+ en el país, un plan llamado R-PP (Proyecto de Preparación de Readness), cuya elaboración tiene un costo mayor a los 7 millones de dólares.

REDD+ es creado en el 2005, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como uno más de los mecanismos de compensación verdes. Permite liberar la venta, de incluso una tonelada carbono a cambio de un bono. Los bonos de carbono adquiridos pueden invertirse en un mercado, donde las corporaciones pueden venderlos, alquilarlos, comprarlos; y solo

una parte de los fondos se entregaría para financiar la conservación del bosque. Costa Rica, entonces, firmó un acuerdo de entendimiento con el Banco Mundial para crear un mercado de este tipo de hasta 63 millones de dólares, una vez que el país cumpla con los requisitos estipulados.

Aunque el capitalismo verde puede sonar absurdo, como “coca cola verde”, bajo los discursos oficiales, estos proyectos de millonaria inversión, buscan convencer que las corporaciones tienen un serio compromiso por mitigar la contaminación. Sin embargo, REDD+ se desvanece como proyecto que logra disminuir la cantidad de producción industrial global, principal responsable de la crisis climática, ya que promueve un permiso para contaminar con miles de toneladas de carbono cotidianamente. Sumando, que son las corporaciones las responsables de producir otros millones de desechos de diferentes composiciones que inundan el planeta y que los árboles no pueden absorber.

Costa Rica se integra rápidamente a la conservación financiada por el FCPF (Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques) y donaciones de cooperación internacional, con el fin de que Minae, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) transfiera fondos de la venta de bonos a los nuevos inversionistas del bosque: madereros, ganaderos, campesinos, ADIIs de pueblos indígenas. Por cierto, los pueblos indígenas son habitantes de grandes extensiones de áreas boscosas en el país y no se nombran inversionistas sino cuidadores.

En este proceso de mercantilizarlo todo, REDD+ compromete los bosques habitados por comunidades indígenas. Los pueblos de Talamanca, Térraba y Boruca, rechazan el proyecto y la consulta preparada. Alertan del peligro privatizador sobre sus usos del bosque y les preocupa

que REDD+, como mega proyecto internacional, no les permita volver a usar el bosque del que viven para construir sus casas o acceder a medicinas; y recuerdan que no solo sus bosques, sino también sus cosmovisiones se encuentran comprometidas.

Además desconocen las negociaciones de un pequeño sector indígena para crear un REDD+ indígena en Costa Rica y rechazan el proceso de consulta, por no haber hecho partícipe a toda la población originaria del país, pues aclaran que la representación es de todo el pueblo y no personas particulares.

Entonces, ¿a qué precio se paga la conservación en Costa Rica? Cuando el gobierno prioriza aprobar un proyecto como REDD+ que da permiso de contaminar a las corporaciones, no soluciona el cambio climático y deja de nuevo en la larga lista de espera de los 500 años los derechos de los pueblos indígenas, la aprobación de la ley de autonomía indígena, y el devolverles a estas comunidades el más de 60% de tierras que están en manos de no indígenas.



ACCIÓN CRÍTICA

El Programa Kioscos Socioambientales fortalece la docencia en la Escuela de Psicología

Por María José Masís Méndez (*)

La Universidad de Costa Rica cuenta con tres pilares fundamentales que articulan su quehacer: acción social, docencia e investigación. La Acción Social parte de premisas epistémicas, políticas, éticas y metodológicas que promueven la construcción de conocimiento en un más allá de la “academia”. Lograr tal cosa, implica la generación de espacios pedagógicos que permitan a las personas docentes, así como al estudiantado, salir de las aulas y establecer contacto con otras realidades, saberes y escenarios sociales.

En este marco, pensando en la necesidad de articular la docencia y la acción social, en aras de mejorar la calidad académica de este centro de enseñanza y la vida de las comunidades y grupos, el Programa Kioscos ha estrechado alianza con la Escuela de Psicología desde el 2010, lo cual ha favorecido que estudiantes del Módulo de Psicología de la Organización Comunitaria realicen sus prácticas profesionalizantes.

El 2015 no fue la excepción y fue así como 18 estudiantes se vincularon con docentes de Kioscos que trabajan en Territorio Bribri en el Caribe Sur, Longo Mai en Buenos

(*)Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

Aires de Puntarenas y Fincas 9 y 10 en Palmar Sur de Osa, en donde se exploró la percepción de las niñas (os) y jóvenes acerca de sus comunidades y se sensibilizó en torno a la defensa del agua, la tenencia de la tierra, los ecosistemas y la vida. También en la Zona Norte se trabajó en los cantones de Los Chiles, Guatuso y Upala, en torno a las luchas sociales y la afectividad.

Gracias a la construcción colectiva de saberes, miradas, sentires y vivencias fue posible que personas de las comunidades, el estudiantado y el cuerpo docente de Kioscos saliéramos trastocados de estas experiencias. Trastocamiento que permitió: 1) acercar a las personas estudiantes a distintos y contradictorios territorios en donde el despojo, la marginalidad y el empobrecimiento, producto del actual modelo económico de acumulación se hace patente; 2) contribuir al fortalecimiento de las capacidades organizativas de grupos que enfrentan algún conflicto socioambiental, y 3) reflexionar acerca de nuestro quehacer como Programa, en donde convergen la docencia y la acción social.

En síntesis: el conocimiento se crea en espacios académicos pero también fuera de ellos, la docencia se realiza dentro de la Universidad, pero también fuera de ella. Razón por la cual se hace una apuesta desde Kioscos por fortalecer la docencia en nuestra Universidad.

Crítica socioambiental al primer año del Gobierno

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

El primer año de gestión de la administración Solís nos deja en general algunos “más o menos” superados por muchos y decepcionantes “menos”. Pocas calificaciones “buenas” han resistido la presión de poderosos medios de comunicación, la heredada burocracia paralizante y los grandes intereses económicos y políticos de siempre. En materia ambiental poco o nada se rescata.

Los “más o menos” del gobierno de cambio. Lo que inició muy bien para beneficio del ambiente, como fue el decreto 38500-S-Minae de moratoria a las actividades de incineración de residuos, parece que puede terminar muy mal, ya que está a punto de caer por la presión de alcaldes y empresas interesadas. Otro caso fue el cacareado con bombos y platillos, decreto de maíz como patrimonio cultural, que no es más que un refrito que propuso el sector ambiental al gobierno pasado. Se suma la convocatoria a un “diálogo” nacional de energía que terminó en un ejercicio para viabilizar proyectos que nada tienen que ver con la expectativa generada por el ministro de declararle la paz a los ríos, tal y como lo había anunciado al respecto de las represas de Pacuare y Zona Sur. Y para cerrar estas medias tintas emite otro decreto de moratoria petrolera, que si bien se extendió en años el que había emitido la administración anterior, no incluye la moratoria a la explotación de gas, por tanto poco innovadora y comprometida resulta su gestión.

(*)*Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

Infraestructura es primero. Cada día es más evidente que son incuestionables las inversiones y megaproyectos de infraestructura heredados de administraciones pasadas: aval a la destrucción del humedal Cariari, desalojo del refugio de vida silvestre y hogar de Jairo Mora, el cuestionado aval ambiental al muelle de APM terminal, reactivación de la refinería China, la regresión ambiental que incluye el proyecto de la ruta 32, impulsar el PH Diquís como “proyecto estrella” sin evaluar aún el costo socioambiental. Tampoco se descarta aún el aeropuerto en la zona pacífico-sur que afecta no sólo patrimonio cultural material de interés mundial como son las milenarias esferas, comunidades indígenas vivas, y el Humedal Térraba-Sierpe también de interés global declarado Sitio Ramsar.

¿Moratoria a la expansión piñera? No hay ninguna intención de cumplir el compromiso de establecer una moratoria a la expansión piñera. Por lo contrario, se está trabajando en dirección opuesta para la exportación de piña a China (Opinión Diario Extra, Sábado 20-8-2014). Ante esto, las comunidades buscan justicia a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cambio climático. No hay un cambio conceptual, discursivo, práctico y mucho menos estructural que permita salir de las falsas y cosméticas medidas como las que se vienen imponiendo, sobre todo a comunidades indígenas, para apropiarse de sus bosques a través de mecanismos engañosos como REDD.

Minería. Con la luz verde al cuestionado Tajo Asunción, el Gobierno actuó contra el actual y futuro abastecimiento de agua en Limón. El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos y, sin mayor problema, le facilitan la apertura de la mina no metálica más grande de todo El Caribe costarricense.

Guerra abierta contra los mares. Absoluta incoherencia, en ausencia de política ambiental integral, este Gobierno se perfiló como depredador de los mares: se ha avalado la matanza de tiburones para la exportación de aletas, impulsado la pesca de arrastre, solicitado el aumento de 7.000 toneladas adicionales de la 9380 de atún que se sobreexplota y todo se regala en nuestras aguas. (Semnario UNIVERSIDAD, 19 -7- 2014).

Transgénicos. Si bien hay un aparente compromiso por respetar los acuerdos de 74 municipalidades declaradas libres de transgénicos, el Gobierno aún no cumplió la promesa de campaña de aprobar un decreto a la moratoria a los cultivos transgénicos.

Setena y continuismo. Las organizaciones ambientales demandaron como primer reto de la administración Solís un cambio en Setena. Lejos del cambio, el Gobierno ha sacado ventaja del continuismo con la aprobación de muchos de los polémicos y cuestionables proyectos que impulsa (feconcr.org, 12- 5-2014).

Pacto ambiental. En campaña, el Partido Acción Ciudadana establecía un Pacto ambiental. Los casos mencionados ni siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos con ese pacto que quedó en el olvido en menos de un año de gestión.

En conclusión. Este Gobierno fijó su ruta en megaproyectos de infraestructura, que ni siquiera son nuevos, a cualquier precio y por encima de cualquier criterio. En lo que se refiere a materia socioambiental, no aconteció el mentado gobierno del cambio. Poco se puede cambiar intentado solamente maquillar y continuar la agenda que venía. Hay que “cambiar” el fondo y no solo la forma; porque se termina haciendo una mala copia del gobierno anterior.

Vínculos de Acción Social

Por Daniel Fernández Vásquez y Valeria Montoya Tabash(*)

América Latina se encuentra en medio de un contexto en el cual la exclusión social y la desigualdad están en constante crecimiento, habiendo actualmente comunidades y regiones con derechos básicos violentados cotidianamente. Ante esto, ha sido y sigue siendo una responsabilidad y un compromiso de la Universidad Pública, abarcando a toda la población que se mueve dentro de esta (estudiantes, profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, etc.) posicionarse y accionar en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Esto -a pesar de no ser homogéneo dentro de la institución- se ha trabajado en la Universidad de Costa Rica (UCR) desde la Acción Social, generando vínculos con comunidades que permiten trabajar alrededor de estos temas.

En setiembre de este año, como parte del diálogo que ha establecido el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Argentina, dos estudiantes de la UCR y asistentes del mismo programa tuvimos la oportunidad de realizar una pasantía durante una semana junto a dicha Secretaría. La Extensión Universitaria en este caso vendría a ser el equivalente a lo que en la UCR llamamos Acción Social, la cual consiste en la forma en que las universidades se vinculan con diferentes procesos sociales, buscando una sociedad menos desigual.

(*)Asistentes del Programa Kioscos Socioambientales.

Durante esta semana, fue posible conocer y participar en distintos proyectos que realiza la Secretaría de la UNR en distintas comunidades de la ciudad de Rosario, estos vinculados al trabajo con personas en situaciones de exclusión social. Desde el trabajo conjunto de la UNR con centros de asistencia social (similar a lo que en Costa Rica conocemos como ebáis, pero con características particulares, por ejemplo, no tener que estar asegurado sino que se es atendido con solo presentar su identificación) que permitían llevar a cabo procesos integrales con las poblaciones que son atendidas en el centro, hasta la participación en organizaciones populares como lo fueron el club 20 amigos y la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, en las cuales se acompañan experiencias que intentan generar transformaciones en las realidades de las personas que participan y se acercan a estas.

Junto a esto se mantuvo un diálogo constante con las personas trabajadoras de la Secretaría y de las comunidades. En este se pudieron no solo comparar y poner en discusión las dinámicas que se dan en nuestros países, sino también establecer puntos de encuentro sobre diferentes iniciativas que se están dando en ambas instituciones o que pueden ser tomadas como puntos de partida en una o en la otra.

El apoyar actividades de este tipo (como lo han hecho en este caso las Vicerrectorías de Vida Estudiantil y Acción Social en la UCR, así como la Secretaría de Extensión Universitaria en la UNR) permite a estudiantes tener la oportunidad de un crecimiento más allá de lo académico y que visibiliza realidades muy desiguales en las cuales es posible hacer y decir algo. Además de esto es posible crear diálogos entre universidades latinoamericanas, desde los cuales se aporta y se genera crítica constructiva a la acción social, buscando mejores formas de ubicar

la relación universidad-sociedad. Los conocimientos generados dentro de las universidades no siempre parten del diálogo y el compromiso con las dinámicas sociales (incluso algunos llegan a creerse neutros ante estas), pero experiencias de este tipo permiten visibilizar la necesidad cada vez más alta de generar una universidad crítica y posicionada ante la realidad no solo nacional, sino latinoamericana, como un deber y responsabilidad de la Universidad Pública.



OCTAVO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA KIOSCOS SOCIOAMBIENTALES

Programa Kioscos Socioambientales, ocho años de recorrido junto a las comunidades

Por Moisés Salgado Ramírez

En el año 2007, nuestro país desarrolló el primer referéndum de la historia de Costa Rica, el cual tuvo como desenlace la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. En este contexto, la Universidad de Costa Rica tuvo una participación fundamental en la producción de conocimiento crítico alrededor de dicho tratado; una de estas iniciativas fueron los Kioscos Informativos del TLC y el Referéndum.

Esta experiencia nos permitió el contacto con decenas de comunidades de nuestro país y nos fue mostrando cómo se manifestaban grandes contradicciones en la lógica de desarrollo que impulsaba este mismo tratado. Las visitas permitieron conocer desde lo cotidiano, cómo la política económica para estas zonas viene respondiendo a una lógica de acumulación que despoja a muchas comuni-

()Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

dades de la forma de propiedad de sus bienes comunes históricos, de sus formas tradicionales de producción, distribución, consumo y de sus saberes y formas de ver el mundo.

También pudimos conocer en estas visitas, y esto, tal vez lo más importante, diversas organizaciones sociales de base comunitaria que precisamente tenían como objetivo organizativo responder a estas formas de despojo de formas de producción, de sus saberes locales, memoria histórica, de sus espacios físicos, es decir, procesos organizativos de defensa territorial.

A partir del año 2008, el trabajo que se realizó anteriormente se reorienta a través de diversos proyectos de acción social, con el objetivo de promover el fortalecimiento organizativo ante problemáticas socioambientales en regiones del país como el territorio bribri en Talamanca, Sixaola, Guácimo, Poás, Barva, Puerto Viejo, Puerto Jiménez, Upala, Los Chiles, Guatuso, Longo Mai, Palmar Sur, entre otros. En el año 2011 se formaliza la creación del Programa Kioscos Socioambientales, desarrollando proyectos inscritos en las Vicerrectorías de Investigación, Acción Social y Docencia.

Durante estos años, el Programa ha generado vínculos con muchas unidades académicas, centros e institutos de investigación, sedes y recintos; también con otras universidades públicas dentro y fuera del país. Estas articulaciones se han desarrollado desde proyectos de acción social como TCU, o a través de cursos, prácticas profesionalizantes, seminarios, proyectos finales de graduación, investigaciones, es decir, desde los tres pilares sustantivos del quehacer universitario.

A partir del 7 de octubre estaremos exponiendo, en el primer piso del Edificio Administrativo A de la Sede Rodrigo Facio (Edificio Rectoría), una muestra elaborada por la artista plástica Raquel Mora, que recupera parte de la producción gráfica que en estos ocho años se han elaborado en las diferentes iniciativas y proyectos, como afiches, memorias, investigaciones, materiales informativos, sistematizaciones, entre otros. Extendemos la invitación a todas y todos los lectores para que en el mes de octubre visiten esta exposición en el marco del octavo aniversario de trabajo del Programa Kioscos.

Ocho años de acción y compromiso social universitario

¡Por una comunidad donde quepan muchos mundos!

Por Mauricio Alvarez Mora (*)

Nos pusimos a nadar contra corriente en el río de la historia, éramos dos, cuatro, seis, siete, once. Después vimos que otros también nadaban juntos, nos tomamos de las manos, sin que nadie quedara atrás. En colectivo hemos encontrado corazones, cuerpos y mentes fértiles que hemos aprendido a labrar y cuidar para que podamos cosechar una gran comunidad de comunidades, que supere la no ética de la guerra que mata naturaleza y humanidad desde la codicia devastadora, y triunfe la ética del amor y el respeto sin que nadie domine a nadie para que podamos caber con todas nuestras diversidades.

Con títeres, teatro, murales, juegos, festivales, campamentos, hemos ido inventando y adaptando técnicas y metodologías por ocho años. Hemos estado en un proceso permanente de experimentación y aprendizaje, donde teorías, metodologías, intuiciones y nosotras, todas las personas que armamos este equipo, somos hipótesis, sujeto y evento de prueba.

Las que juzgan la pertinencia y la eficacia de los procesos han sido las comunidades: caras largas y boste-

(*)Docente del Programa Kioscos Socioambientales.

zos significa que estamos lejos, mientras que miradas vivaces, manos levantadas, ojos que brillan nos dicen que estamos andando buenos caminos. ¿Universidades a prueba de comunidades? Más bien, formas de hermanar, a prueba de privilegios de unos saberes sobre otros.

Estos ocho años, y todos los que traemos encima, no son sólo cúmulo de conocimientos sino gestación de nuevos que han emergido del vínculo entre la sabiduría que distintos pueblos y comunidades y movimientos sociales han compartido y aprendizajes aportados por las muchas disciplinas académicas, que en conjunto hemos unido en otras formas de hacer, pensar-sentir y decir.

Han sido años de trabajo en equipo, un equipo que es un verdadero privilegio conformar. A todo esto se suma la enorme paciencia de muchos colaboradores y funcionarios de la “U” que se han echado al hombro esta aventura también y que han permitido crear este campo abierto para el cultivo de la acción social y compromiso.

La imagen clásica de kioscos es: una buseta cargada de estudiantes, de equipos, colchonetas, sonido y planta eléctrica y las infaltables botas de hule. Como nómadas gitanos, cruzamos y erramos por casi todos los rincones del país donde las comunidades intentan apropiarse de su historia, transformarla para ir labrando un territorio, geográfico y simbólico, más justo y solidario.

Podemos decir entonces que hemos aportado al tejido de una universidad donde podemos ir hilando otras epistemologías más diversas y multicolores, una universidad más cercana y flexible para que convivan múltiples comunidades, saberes, pensares, haceres y sentires.

Hemos caminado con una ética política en permanente disputa, con crisis y rupturas que han implicado crecimiento en todo sentido, con tensiones que no hace falta

disimular que responden al orden injusto que inunda, rige y cruza nuestras vidas.

En cada experiencia, la intensidad es la constante, sin importar cantidad de minutos, horas o días. Lo mismo fue recorrer calles informando sobre el TLC durante cien días y noches, que subir durante un día completo con todo el equipo de video, computadoras, y demás al Alto Uren para dar un taller sobre minería, así como presentar un video en bribri para 20 habitantes que poco comprenden el “idioma de castilla”, como decían, ese que nos impusieron desde 1492.

Hoy no solo podemos celebrar 8 años luego del TLC o de kioscos, hoy tenemos muchas celebraciones y razones para seguir soñando y empujando esta carreta diversa y alegre.

Hay datos cada vez más contundentes de cómo las comunidades han tomado la delantera y han iniciado importantes luchas por la defensa de su territorio: el Estado de la Nación contabilizó 486 acciones colectivas o protestas sobre asuntos ambientales entre 1994 y 2013. Las comunidades fueron las protagonistas de casi la mitad de esas acciones colectivas ejemplificado en movimientos de alcance nacional como en Sardinal de Guanacaste en 2007, esta gente, articulada con muchos otros sectores, puso un alto a los intentos de privatización y saqueo de su recurso hídrico.

Lo mismo en Talamanca, donde comunidades frenaron el intento de una Marina en Puerto Viejo en 2008, así como la importante lucha indígena contra la minería en cerros sagrados Talamanca. También una fuerte lucha contra la expansión piñera en el Caribe se ha logrado consolidar mediante la movilización para la incidencia en políticas locales. El triunfo de la lucha contra la

minería de Industrias Infinito en Crucitas o recientemente en la defensa del agua en Potrero Grande. En todas estas luchas Kioscos ha sido universidad que cumple su papel de acompañar y vincular los procesos de reivindicación social y organización, junto con la docencia y la investigación.

Visibilizar, movilizar, resistir y transformar han tenido el peso constante de intentos de represión, en muchas ocasiones la Universidad se ha visto amenazada para que silencie nuestro trabajo, en los archivos de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR abundan cartas y otros tipos de presiones en contra de nuestro quehacer, unas más explícitas que otras, pero general vienen de protagonistas que hablan de desarrollo como sinónimo de enriquecimiento de unos cuantos en detrimento muchas veces de la calidad de vida de muchos y de la Naturaleza por ejemplo empresas y productores de plantas ornamentales, piñeras, interesados en las marinas en Puerto Jiménez y Puerto Viejo, los intereses que se mueven, muchas veces entre sombras y sin dar la cara, detrás de la destrucción de la Fila Costeña.

Hay casos que ilustran bien esta constante, por ejemplo cuando la minera de Crucitas vio como amenaza para sus intereses una universidad crítica y consiente y se lanzó a demandar profesores, presionando por obtener información detallada sobre los recursos utilizados por Kioscos, y una serie de acciones que van en contra de la autonomía universitaria.

Y la más reciente presión ha venido por parte de una empresa cuyo proyecto hidroeléctrico en el Río Parismina no se construyó, amenazó con una serie de denuncias que culminaron en un importante criterio legal emanado desde la Oficina Jurídica de la UCR que se pronunció en defensa sobre el tema de la libertad de cátedra en el

Programa. (Ver informe Rectoría 2013 pág. 88). Al final Kioscos y las comunidades han salido fortalecidas.

¿Y cómo surgió Kioscos? Hablar de kioscos implica hablar del TLC y del fraude que fue en sí mismo el referendo del 7 de octubre de 2007. Hace 8 años vivimos el trauma social ante el abuso de poder y recordar aquel momento es doloroso, pero también es motivo de alegría y orgullo porque significa recordar la resistencia y la propuesta de una iniciativa que se consolidó como el Programa Kioscos Socioambientales para la organización comunitaria.

No contaban que aquella agresión detonó un motor de cambio irreversible que aún nos cuesta ver, datar, entender. Apenas y reconocemos sus efectos más visibles, como lo fue el evento de las pasadas elecciones presidenciales, donde el “Sí” neoliberal fue derrotado, al menos simbólicamente en ese momento.

Los que creyeron que perdimos, si empiezan a sumar, verán muchos, muchísimos pequeños puntos que juntos son indicadores positivos y demostrativos del fortalecimiento de la organización social en Costa Rica, esa que ha creado formas de vivir mejor y que quiere un país con menos privilegios para unos pocos y más beneficios para todas y todos.

Así que Kioscos nació a la sombra gigante de trampas con nombre de tratado de libre comercio, que de libertad no tiene nada, y a la luz de la resistencia al miedo y al engaño.

En este aniversario de Kioscos reconocemos que hemos aprendido a que la esperanza está en todos los mundos que habitan en nuestras comunidades y realidades, y que es allí donde hay que buscar, reconocer y crear respuestas antes de buscar otros mundos y rumbos para nuestro país.

Homenaje

Lautaro del Valle: el Che Guevara que vive en Punta Uva

José Julián Llaguno Thomas (*)

Sentados en la entrada de una casa en Playa Negra de Puerto Viejo lo vimos por primera vez acercarse. Era el año 2008 y mi compañero Moisés y yo nos preparábamos para recibir a diferentes líderes y lideresas del cantón de Talamanca que habían recorrido toda la provincia de Limón para conversar con la gente sobre las consecuencias negativas de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

A pesar de que el No perdió el referéndum a nivel nacional, en Talamanca habían tenido una victoria aplastante, más del 90% dijo No al TLC. Este era un lugar privilegiado para estar y teníamos la dicha de desarrollar talleres sobre las amenazas y las alternativas sociales que estaban construyendo estas personas desde hace muchos años, al fin al cabo los pueblos bribri y cabecar llevaban un poco más de 500 años en esta labor.

Lo vi acercándose a la casa en donde se iba a desarrollar el taller, se veía alegre y sereno. Botas de hule, un jeans azul, una camiseta con algún mensaje y una gorra del Che Guevara era su atuendo acostumbrado. A penas nos sentamos a conversar me empezó a hablar de Venezuela y del proceso de cambio que se llevaba en ese país desde

(*)*Docente del Programa Kioscos Socioambientales.*

que Chavez era Presidente. Aunque yo personalmente nunca he sido un admirador de los caudillos y menos si son militares, lo escuche con atención y estuvimos conversando un gran rato sobre todo lo que pasaba en América Latina. A partir de ese momento, esas tertulias políticas y sociales se repetirían cada 15 días mas o menos en los próximos 6 años.

Sin darme cuenta, con el paso del tiempo fui ganando a un amigo, un compañero, un camarada y sobre todo a un maestro. Esta es la razón, por la que en este día hemos preparado este pequeño homenaje a una persona que nos han llenado de fuerza, esperanza, alegría y mucha reflexión. Desde un rincón llamado Punta Uva, localizado en Sixaola de Talamanca, este Che Guevara contemporáneo realiza su propia utopía campesina. Un bosque rodeado de muchos cultivos, arboles y animales son su hogar. Con una casa hecha con sus propias manos, sin luz eléctrica, teléfono o Internet. Una pequeña guarida protegida por enormes árboles de Ceiba, rodeada de ríos y cuidada por jaguares en las noches, esta porción de tierra es un ejemplo vivo de lo que queríamos hacer muchas personas en ese lugar, aprender, intercambiar y sobre todo poner en practica la vida frugal, justa y natural.

Siempre llegaba de primero a todas las actividades, aunque tuviera que caminar una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta para llegar a su casa. Su gorra del Che siempre lo acompañaba y le brillaban los ojos cuando yo o alguna otra persona le preguntaba por los acontecimientos recientes. A partir de ese momento, se activaba su memoria y empezaban las cátedras de historia latinoamericana, porque al final así es una conversación con Ramón Abarca Chaves, ese Che Guevara campesino que vive en Punta Uva. Cuba, Nicaragua, El

Salvador, México y Chile eran los países que más recordaba, todos escenarios de grandes torbellinos revolucionarios en el siglo XX y donde Roberto, que es el nombre por el que todo el mundo lo conoce, había estado varias veces y de distintas maneras colaborando con los procesos de cambio.

Sus principales influencias ideológicas eran su abuela y Jesús, que con una gran salpicada de Marx, Che Guevara, Zapata y Sandino, formaban una particular visión de la vida que podía acercarse bastante a la teología de la liberación; esa filosofía que tanto influenciado a muchas familias campesinas en América Latina a tomar el destino en sus manos y tratar de compartirlo con el prójimo. Hablar con Roberto sobre nuestro continente era una increíble forma de transmitir esa memoria de lucha, de esperanza y de alegría, que tantos pasajes dolorosos ha construido en las huellas de nuestros antepasados. Su visión ideológica, su identidad campesina y su carisma organizativo, lo han convertido en una persona muy querida y solicitada como consejera política y muchas veces hasta existencial.

Hoy que su salud se ve quebrantada por el paso del tiempo y de la intensa vida militante que ha llevado por más de 60 años, queremos dejarle estas palabras de gratitud, de amistad, de cariño y de profundo respeto, por ser nuestro maestro, nuestro compañero, nuestro camarada y nuestro amigo. Pocas veces en la vida, uno tiene la suerte de encontrarse a una persona con tantas facetas diferentes. Ramón en su carnet de ciudadano, Roberto entre la gente conocida, el Che entre sus amigos y amigas cercanas y Lautaro del Valle entre sus camaradas de combate, pero sobre todo un campesino como el siempre orgullosamente lo ha manifestado.

Valga este reseña para reconocer sus aportes como militante en el Partido Comunista de Costa Rica, como sindicalista en las bananeras de Limón, como dirigente de base en los comités de tierra, como campesino agro-ecológico en su finca, como maestro de matemáticas, estudios sociales, español y biología, como líder espiritual sin Iglesia y sobre todo como compañero de tantos jóvenes soñadores que como yo y mis compañeros y compañeras, hemos compartido un pequeño trayecto de su largo camino.

Que sean estas palabras una invitación a recuperar la memoria de nuestro pueblo que desde muchos rincones de Costa Rica, se activa para convocar a las luchas pasadas y presentes, para construir un futuro digno de ser vivido en todo su esplendor de libertad. Y sobre todo para recordarnos que en el “país mas feliz del mundo” también existe mucha injusticia, pero también mucha dignidad y fuerza que se mueve cada segundo, en cada rincón de este territorio. A Roberto y todos los amigos y amigas que trabajan la tierra, les quiero dejar un testimonio de mi gratitud para ayudarnos a hacer crecer esta pequeña parcela de libertad, creatividad y amor por la humanidad.

A ustedes y todas las personas que nos acompañan hoy gracias! Salud, amor y libertad!



Grafiti Retrato del Che (Roberto) realizado por Mush y Kien en el Salón Comunal de Paraíso de Sixaola en el año 2017.



Ríos Libres

Semillas Libres

NO REDD+

No al Aeropuerto Internacional del Sur

VIVA LA CULTURA CAMPESINA

NO TLC

Autonomía Indígena

M M M M
M M M M